



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS  
“LA CONFRONTACIÓN DEL DAÑO PSICOLÓGICO Y EL DAÑO PSÍQUICO EN LA  
IMPUTACIÓN DE LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR”

PRESENTADO POR  
Bach. JOSÉ ROLANDO CARDENAS GONZALES

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESOR  
Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

LAMBAYEQUE, 2019



Tesis denominada “LA CONFRONTACIÓN DEL DAÑO PSICOLÓGICO Y EL DAÑO PSÍQUICO EN LA IMPUTACIÓN DE LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR”, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADO, por:

---

Bach. JOSÉ ROLANDO CARDENAS GONZALES  
AUTOR

---

Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO  
ASESOR

APROBADO POR:

---

Dr. JOSÉ MARÍA BALCAZAR ZELADA  
PRESIDENTE

---

Mag. RICARDO PONTE DURANGO  
SECRETARIO

---

Mag. FRANCISCO SANTIAGO DELGADO PAREDES  
VOCAL



## DEDICATORIA

A mi madre Mayela Marilú González Pérez, quien es mi mayor motivación en cada uno de mis objetivos, sin ella, nada podría ser posible.



## AGRADECIMIENTO

En primer lugar, a Dios, por darnos su gracia cada día, y la sabiduría en cada una de nuestras acciones. A mi madre por ese esfuerzo incansable por hacer de mí una mejor persona y un buen profesional. A mi tío Juan Cárdenas, por el gran apoyo y preocupación demostrada a lo largo de mi formación profesional; y, a mis profesores, por los denodados esfuerzos para motivarnos al estudio de la ciencia del Derecho.



## INDICE

DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO.....	iii
INDICE .....	iv
INDICE DE TABLAS .....	ix
INDICE DE GRÁFICOS .....	xi
RESUMEN.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
INTRODUCCIÓN .....	15
CAPITULO I.....	18
ASPECTOS METODOLOGICOS .....	18
1.1. Realidad Problemática.....	18
1.1.1. Planteamiento del Problema. ....	18
1.1.2. Formulación del Problema.....	22
1.2. Justificación e Importancia del Estudio .....	22
1.2.1. Justificación del Estudio .....	22
1.2.2. Importancia del Estudio.....	23
1.3. Objetivos.....	24
1.3.1. Objetivo General .....	24
1.3.2. Objetivos Específicos .....	24
1.4. Hipótesis .....	24
1.5. Variables.....	25



1.5.1. Variable Independiente.....	25
1.5.2. Variable Dependiente .....	25
1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección .....	25
1.6.1. Métodos .....	25
1.6.1.1. Método Exegético Jurídico .....	25
1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo.....	26
1.6.1.4. Método Inductivo .....	26
1.6.2. Técnicas .....	27
1.6.2.1. Análisis Documental .....	27
1.6.2.2. Observación .....	27
1.6.2.3. Encuesta.....	27
MARCO TEÓRICO.....	29
CAPITULO II.....	29
LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA PARA LA IMPUTACIÓN DE LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR. ....	29
2.1. Base histórica de la imputación penal .....	29
2.2. El concepto cognitivo- volitivo de la imputabilidad. ....	30
2.3. Violencia familiar.....	32
2.3.1. Definición de violencia familiar .....	33
2.3.2. Tipos De Violencia Familiar. ....	35
2.3.2.1. El Maltrato Físico.....	35
2.3.2.2. El Maltrato psicológico: .....	38
2.3.2.3. El Maltrato sin Lesión .....	50



CAPÍTULO III .....	54
LA PROTECCIÓN DEL DAÑO PSICOLÓGICO Y PSÍQUICO.....	54
3.1. Configuración Legal para la Calificación del Daño Psicológico. ....	54
3.1. 1. Determinación del Daño Psíquico. ....	55
3.2. Políticas Criminales Para Proteger A Las Víctimas De Violencia.....	55
3.2.1. Concepto de políticas criminales.....	55
3.2.2. Políticas criminales sobre violencia familiar .....	56
3.3. Las medidas de protección en la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ....	59
3.3.1. Crítica A La Eficacia De Las Medidas .....	61
3.3.2. Ley de protección contra el daño o violencia familiar en EEUU.....	62
3.3.3. En Ecuador:.....	64
3.3.4. En Chile .....	70
3.3.5. En Colombia.....	71
3.3.6. En España.....	72
CAPÍTULO IV .....	73
ANÁLISIS Y RESULTADOS .....	73
Análisis de los parámetros en la determinación del daño psicológico y psíquico.	73
4.1. Análisis de los resultados: .....	73



4.1.1. Resultados de la observación de los parámetros para la determinación del daño psicológico y psíquico en las víctimas de violencia familiar. ....	73
4.1.2. Resultados del análisis estadístico.....	75
4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos. ....	80
CAPÍTULO V .....	94
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS .....	94
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .....	94
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la justificación jurídica para la imputación de lesiones leves por violencia familiar”.....	94
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la configuración legal para la calificación del daño psicológico”. ....	97
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar los parámetros en la determinación del daño psíquico. ....	99
5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES.....	101
5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS .....	103
CONCLUSIONES.....	105
RECOMENDACIONES .....	107
ANEXOS.....	110
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. ....	110



2. Solicitud de información estadística de casos por violencia familiar requerida al Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.....	114
3. Solicitud de información estadística de casos fiscales, requerida a Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque. ....	116
Bibliografía.....	117



## INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2015 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque. ....	75
Tabla 2: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2016 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque .....	76
Tabla 3: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2017 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque .....	76
Tabla 4: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2018 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque .....	77
Tabla 5: Cuadro consolidado de los resultados estadísticos sobre la atención de expedientes por violencia familiar en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque, entre los años 2015 -2018.....	78
Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	80
Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	82
Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	84



Tabla 9: Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	86
Tabla 10: Resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	88
Tabla 11: Resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	90
Tabla 12: Resultado de la afirmación N° 7 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	92



## INDICE DE GRÁFICOS

Ilustración 1: Gráfico porcentual del Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque.....	81
Ilustración 2: Gráfico porcentual del Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque.....	83
Ilustración 3: Grafico porcentual del Resultado de la afirmación N°3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque.....	85
Ilustración 4: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque.....	87
Ilustración 5: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque.....	89
Ilustración 6: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque.....	91



Ilustración 7: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 7 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque .....	93
---	----



## RESUMEN

Muchas son las críticas que ha recibido la última Ley sobre violencia familiar, entre otros aspectos la configuración del tracto procesal que siguen las denuncias por maltrato psicológico, ante las cuales el juzgador dicta medidas de protección a manera de prevención mientras el Ministerio Público evalúa la configuración del delito; precisamente es sobre ello que se proyecta la investigación, puesto que interesa observar con detenimiento la estructura de la regla y los efectos que esta tiene al momento de su aplicación, esto es, la evaluación fiscal de los hechos que se presumen como violentación psicológica, pues bien, ante la existencia de un informe pericial inicial que indica posible alteración psicológica, cognitiva o conductual, se procede a la correspondiente calificación como delito. El problema asimilado se ubica en el examen para la determinación de la afectación psíquica que conforme lo indica el equipo multidisciplinario sólo se puede hacer a la vuelta de seis meses, surgiendo entonces el cuestionamiento siguiente: ¿esta valoración final tendrá congruencia con la calificación inicial y ello constituiría razón para la configuración de un nuevo delito pasible de persecución penal?, lo cual será resuelto con los aporte doctrinario y jurisprudenciales que se obtengan de la tesis.

**Palabras Claves:** Daño Psicológico, Daño Psíquico, Lesiones Leves, Violencia Familiar



## ABSTRACT

Many are the criticisms that the latest Law on Family Violence has received, among other aspects the configuration of the procedural tract followed by the complaints of psychological abuse, before which the judge dictates protective measures in a manner of prevention while the Public Prosecutor evaluates the configuration of the crime; it is precisely on this that research is projected, since it is important to observe carefully the structure of the rule and the effects that it has at the time of its application, that is, the fiscal evaluation of the facts that are presumed as psychological violence, because Well, before the existence of an initial expert report that indicates possible psychological, cognitive or behavioral alteration, it is proceeded to the corresponding qualification as a crime. The assimilated problem is located in the examination for the determination of the psychic affectation that according to the multidisciplinary team indicates it can only be done after six months, and the following question arises: this final assessment will be consistent with the initial qualification and this would constitute a reason for the configuration of a new offense subject to criminal prosecution ?, which will be resolved with the doctrinal and jurisprudential contributions obtained from the thesis.

Keywords: Psychological Damage, Psychic Damage, Minor Injuries, Family Violence



## INTRODUCCIÓN

Esta investigación parte de la inquietud generada a base de la experiencia vivenciada en el Ministerio Público respecto a la forma en que se produce el tratamiento de los casos de violencia familiar con particular orientación hacia la que comprende un daño psicológico, lo cual permite evidenciar un problema o dificultad de poder probar y medir el nivel de gravedad de las misma; y más aún, el poder encontrar el grado de relación entre tal tipo de violencia y el daño psíquico para imputar lesiones leves.

Sustancialmente la preocupación conlleva al examen legislativo del contenido de los artículos 122, 122-B y 124- B del Código Penal; referidos a los tipos penales de Lesiones Leves, Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y; lo referente al Daño Psíquico y la Afectación Psicológica, Cognitiva y Conductual, que permitió encontrar una suerte de incongruencia en su composición, siendo está relacionada con la proporcionalidad de la sanción y la gradación del daño causado por la acción violentista.

Es precisamente en base a estas razones que se construye la problemática mediante la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico para imputar lesiones leves por violencia familiar?



Cuestionamiento que de momento inicial respecto a la investigación se construye de la siguiente manera: Si se logra determinar el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico; entonces, se asegurará una adecuada imputación del delito de lesiones leves por violencia familiar; afirmación que ha sido contrastada con el resultado de la observación de esta tesis.

Es importante resaltar que tanto la formulación del problema cuanto la hipótesis, tienen en su composición dos elementos importantes que son las variables cuya relación causal permitió dar sentido a la investigación y se desencadenó en los objetivos general y específico, siendo éstos últimos los que como metas de la investigación dotaron de contenido según lo que se describe a continuación.

En el Capítulo I, la investigación plasma el diseño metodológico que ha pautado el desarrollo de esta tesis, así se describe desde el título de la misma, la formulación, justificación e importancia del problema, hipótesis, sus variables y métodos utilizados, lo cual se entiende ha servido de ruta lógica para el estudio emprendido.

Luego en el Capítulo II, se inicia con el desarrollo teórico, comprendido en primer lugar por la justificación jurídica para la imputación de lesiones leves por violencia familiar, lo cual permitió recoger la teoría correspondiente a este tema partiendo por la imputación y su concepto volitivo para continuar con la descripción de la violencia familiar.

Seguidamente en el Capítulo III, el recojo teórico se enfoca en la protección del daño psicológico y psíquico, con la intención de plasmar las pautas que en nuestro



ordenamiento se utilizan para su determinación y luego en base a ello determinar cuan efectiva resulta su aplicación, desde luego partiendo de la perspectiva de la finalidad del derecho penal que es desde donde opera la observación en base a los artículos 122-B y 124-B.

Finalmente, en los Capítulos IV y V, se compuso e informe de la observación de la realidad, partiendo del análisis estadístico, pasando por el examen de la opinión de la comunidad jurídica y a continuación en el último capítulo se desarrolla la discusión, validación de variables y la contrastación de la hipótesis propiamente dicha, permitiendo todo ello consolidar las conclusiones y recomendaciones que en esta ocasión se someten al juicio evaluador de los miembros del jurado de tesis.

El Autor.



## **CAPITULO I**

### **ASPECTOS METODOLOGICOS**

#### **1.1. Realidad Problemática**

##### **1.1.1. Planteamiento del Problema.**

Para la construcción de una adecuada Teoría del Delito en el análisis típico de los ilícitos penales contra la vida, el cuerpo y la salud, como lo son el homicidio y lesiones, por ejemplo, al constituir eventos criminales más configurables y posibles de probar, se posibilita el entendimiento y discernimiento de los elementos de la configuración típica de los mismos; pero el escenario se torna un tanto complejo cuando se trata de imputar delitos referidos a lesiones psicológicas bajo el supuesto de violencia familiar y en consecuencia, determinar cuál es el parámetro a utilizarse para medir este tipo de daño subjetivo ocasionado a la víctima. Pero lo más preocupante es con respecto a lo establecido en el art. 124- B del Código Penal, el mismo que fue incorporado mediante ley 30364 “*Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar*”, y que fue modificado posteriormente por Decreto Legislativo 1323 “*Decreto legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género*” quedando en la actualidad la siguiente tipificación:



**Artículo 124-B. Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual.** *El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, con la siguiente equivalencia:*

- a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.*
- b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.*
- c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico.*

*La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico.” (CODIGO PENAL, 1991, pág. 155)*

Nos es sumamente desconcertante la diferenciación que hace el legislador entre daño psíquico y afectación psicológica y sobre todo como interpretaremos la configuración de tales daños para equipararlos dentro del delito de lesiones. Más aún, si tomamos en consideración que la diferenciación entre ambos tipos de daños se presenta disgregados en los siguiente tipos penales: En primer lugar, el inciso del artículo 122 del Código Penal, referente al delito de Lesiones Leves, donde se establece que *“El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.”* . En segundo lugar, el primer párrafo del artículo 122- B, referido al delito de Agresiones en contra de las mujeres



o integrantes del grupo familiar se tipifica que *“El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de **afectación psicológica, cognitiva o conductual** en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.”*

Si tomamos en consideración que el estado mental constituye el aspecto más enigmático e impredecible de los seres humanos; con más razón, el derecho penal no debe ser ajeno a tal campo, aunque se muestre tan incompresible. En tal sentido es que existe la *“Guía para la Valoración del Daño Psíquico en Víctimas Adultas de Violencia Familiar, Sexual, Tortura y Otras Formas de Violencia Intencional”*, cuya preparación estuvo a cargo de un comité de especialistas conformado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1201-2009-MP-FN, con una versión del año 2011 y la más reciente del año 2016, en cuyo contenido se consideraron niveles o escalas de daño psíquico, que luego se integraron al ordenamiento penal material.

La definición de daño psíquico planteada por el Comité de Especialistas para la Elaboración de la Guía de Valoración del Daño Psíquico, considera a las lesiones psíquicas agudas que pueden cesar con el tiempo o por el apoyo recibido, y a las secuelas del daño psíquico. Se entiende por secuelas a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad que permanece en el examinado en una o más áreas de su funcionamiento psicosocial por lo menos durante seis meses. (EL PERUANO, 2016, pág. 602407)

El problema asimilado se ubica en el examen para la determinación de la afectación psíquica que conforme lo indica el equipo multidisciplinario sólo se puede hacer a



la vuelta de seis meses, surgiendo entonces el cuestionamiento siguiente: ¿esta valoración final tendrá congruencia con la calificación inicial y ello constituiría razón para la configuración de un nuevo delito pasible de persecución penal? lo cual será resuelto con los aportes doctrinarios y jurisprudenciales que se obtengan de la tesis. Nos interesa observar con detenimiento la estructura de la regla y los efectos que esta tiene al momento de su aplicación, esto es, la evaluación fiscal de los hechos que se presumen como violentación psicológica, pues bien, ante la existencia de un informe pericial inicial que indica posible alteración psicológica, cognitiva o conductual, se procede a la correspondiente calificación como delito. Sobre el particular, existe la *“Guía de Evaluación Psicológica Forense en caso de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y en otros Casos de Violencia”*, cuya metodología de intervención determina el estado emocional de las personas víctimas de violencia familiar, pero lo más interesante es que tal guía constituye el nivel de abordaje inicial para la aplicación de la Guía de Valoración de Daño Psíquico, la cual mencionamos con anterioridad.

Según la *Guía de Evaluación Psicológica Forense en caso de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y en otros Casos de Violencia (2016)*, las fases por las que pasa el daño psicológico son : “1.- Reacción de sobrecogimiento; 2.- Tendencias afectivas dramáticas y 3.-Tendencia a revivir intensamente el suceso” (pág. 27)



En torno la discusión presentada, podemos indicar que la idea central de nuestro planteamiento problemático está claramente establecida; esto es, enfocar la atención investigativa hacia la necesidad de determinar cuál es el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico para imputar lesiones leves por violencia familiar. Razones por las que nos proyectaremos a formular la siguiente interrogante, la cual servirá como punto de partida en nuestra labor académica.

### **1.1.2. Formulación del Problema**

¿Cuál es el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico para la adecuada imputación lesiones leves por violencia familiar?

## **1.2. Justificación e Importancia del Estudio**

### **1.2.1. Justificación del Estudio**

Fácticamente se ha considerado justificada esta investigación en función a evaluar las incidencias sociales que produce el flagelo de violencia familiar en nuestra realidad actual; centrándonos específicamente en el tipo de violencia psicológica, que hoy se torna un tanto enigmática de poder probar y medir el nivel de gravedad de las misma; y más aún, el poder encontrar el grado de relación entre tal tipo de violencia y el daño psíquico para imputar lesiones leves.



Legalmente se halla una justificación dado el contenido de los artículos 122, 122-B y 124- B del Código Penal; referidos a los tipos penales de Lesiones Leves, Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y; lo referente al Daño Psíquico y la Afectación Psicológica, Cognitiva y Conductual

Se justifica doctrinariamente el presente trabajo académico, toda vez que lograremos ubicar los conceptos, teorías e ideas adecuadas que servirán de base a futuros planteamientos sobre nuestro tema; teniendo en cuenta ello, realizaremos un estudio doctrinario respecto al derecho la imputación de lesiones leves por violencia familiar; además de la configuración legal para la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico.

### **1.2.2. Importancia del Estudio**

La importancia del presente trabajo de investigación radica en el estudio doctrinario y jurisprudencial que realizaremos en torno a encontrar el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico para imputar lesiones leves por violencia familiar, cuyo resultado.



### **1.3. Objetivos**

#### **1.3.1. Objetivo General**

Determinar el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico para la adecuada imputación del delito de lesiones leves por violencia familiar.

#### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- ✓ Desarrollar doctrinariamente la justificación jurídica para la imputación de lesiones leves por violencia familiar.
- ✓ Estudiar la configuración legal para la calificación del daño psicológico.
- ✓ Analizar los parámetros en la determinación del daño psíquico.

### **1.4. Hipótesis**

Si se logra determinar el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico; entonces, se asegurará una adecuada imputación del delito de lesiones leves por violencia familiar



## **1.5. Variables**

### **1.5.1. Variable Independiente**

Congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico.

### **1.5.2. Variable Dependiente**

Adecuada imputación del delito de lesiones leves por violencia familiar

## **1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección**

### **1.6.1. Métodos**

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos, los cuales han permitido desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así se describen a continuación:

#### **1.6.1.1. Método Exegético Jurídico**

Este método fue aplicado para interpretar el sentido de los artículos 122 B y 124 – B en el ordenamiento penal respecto al efecto que tiene sobre la determinación del daño psicológico y la consecuente imputación, a fin de verificar su congruencia jurídica; detalle que se ha confrontado con la realidad nacional y regional,



permitiendo obtener una postura orientada por el principio de la ratio legis como resultado, en base a lo cual podrá contrastarse la hipótesis planteada.

#### **1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico**

Este método ha sido empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado del ordenamiento jurídico penal y aquel concerniente al ámbito de protección familiar, lo cual permitió arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

#### **1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo**

Al emplear el método hipotético deductivo se ha podido verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

#### **1.6.1.4. Método Inductivo**

La aplicación de este método conllevó al análisis del material de estudio, el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.



### **1.6.2. Técnicas**

En el desarrollo de este tema, se hizo uso de las técnicas de recolección de la información que permitieron establecer los parámetros con los que se definió la propuesta, permitiéndolo plantear al final las sugerencias en función a los resultados.

#### **1.6.2.1. Análisis Documental**

Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, etc., con lo cual se lograron acumular los datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho de Penal y Derecho de Familia, específicamente respecto la eficacia de los artículos 122- B y 124-B del Código Penal, respecto a la imputación de la violencia psicológica.

#### **1.6.2.2. Observación**

Se utilizó la guía de observación, con la cual se observó la realidad socio jurídica que engloba la ratio legis de los artículos 122-B y 124 B del Código Penal, con la finalidad de ubicar el enfoque sobre el que cimienta su orientación proteccionista desde la perspectiva de la finalidad de la sanción.

#### **1.6.2.3. Encuesta**

Se empleó la guía de encuesta; la cual ha sido aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Fiscales, Jueces y especialistas, quienes han vertido sus opiniones respecto de la



problemática sobre la eficacia de la imputación de la violencia psicológica en razón de la estructura de los artículos 122-B y 124 B del Código Penal.



# **MARCO TEÓRICO**

## **CAPITULO II**

### **LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA PARA LA IMPUTACIÓN DE LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR.**

El desarrollo de la investigación en busca de la verificación del problema propuesto, invita a la ubicación de los argumentos que otorgaron justificación jurídica para que se implemente la imputación de las lesiones leves por violencia familiar, con lo cual se podrá obtener la base que sirva para establecer si la forma en que se está aplicando la misma, es la más adecuada respecto a los fines garantistas del derecho penal.

Por todo ello corresponde iniciar la construcción de los contenidos orientándose sobre el eje temático que comprende a la imputación como figura jurídica, con la intención de lograr establecer los parámetros que permiten el manejo adecuado del control social a través del ius puniendi del Estado como respuesta a los ilícitos penales.

#### **2.1. Base histórica de la imputación penal**

Es menester recoger ciertas posturas que hacen referencia a la imputación como característica o finalidad de la aplicación del derecho, pues la persecución penal ha de obedecer a ciertas reglas que permitan un manejo adecuado del control bajo los lineamientos que ofrece la garantía de los derechos fundamentales.

Así, se puede ubicar formas de aplicación del derecho mediante la imputación en base a parámetros que corresponden a épocas tan antiguas como el momento en que se desarrolla



el derecho romano, cuyas fuentes no siempre estaban originadas por el derecho escrito y que según Martínez Garay (2001):

Del estado de cosas descrito se deduce que el Derecho que se aplicaba en la práctica no estaba constituido, ni única ni principalmente, por los textos legales escritos, sino, junto a ellos, por todo aquello que la doctrina penal y la práctica judicial, íntimamente unidas, reconocían como fuente de Derecho, y éstas eran las siguientes: el Derecho romano producto de la Recepción, la Carolina y las legislaciones particulares de los diversos Estados, la Biblia y el Derecho canónico, la propia práctica judicial y, muy al final del período estudiado, el Derecho Natural. Es por esta razón por lo que resulta inevitable, como se ha advertido al comienzo, atender a las elaboraciones doctrinales si se quiere obtener una visión completa del tratamiento de los supuestos de inimputabilidad en el Derecho penal común (pág. 51).

Puede apreciarse cuales fueron las fuentes que inspiraron al Derecho en la época señalada, siendo la principal las provenientes del Derecho Romano, que como sabemos, constituye la base y la inspiración del tratamiento del Derecho de todos o la mayoría de los ordenamientos jurídicos.

## **2.2. El concepto cognitivo- volitivo de la imputabilidad.**

Consiste en la capacidad de comprensión, que a su vez se sustenta en la capacidad de juzgar y valorar. Para poder decidir cómo se configura el elemento del conocimiento del ordenamiento jurídico penal, no se necesita de teorías epistemológicas ni psicológicas sino que constituye también una imputación. La labor del análisis, entonces deberá centrarse, por lo tanto, en precisar cuáles son esos criterios normativos con los que se



sustenta la imputación del conocimiento de la regulación jurídico-penal, tal cual establece

De La Rosa Gutierrez Genaro:

Además de ellos, quizás el más relevante, desde el punto de vista de nuestro estudio, sea el concepto de imputabilidad “cognitivo-volitivo” establecido por la doctrina penal. La categoría de imputabilidad, en cuanto capacidad de culpabilidad, vendría de esa forma a suponer una doble facultad en el sujeto que previamente ha llevado a cabo una realidad fáctica, la cual ya ha sido calificada de típica y antijurídica (De La Rosa Gutierrez, 2011)

Vemos como estos componentes cognitivo y volitivo están íntimamente relacionados, se complementan y sobre todo se presentan ante el carácter del injusto de determinada conducta, es decir la tipicidad y la antijuricidad de una conducta específica. Según lo que se pueda apreciar de lo referido por García Caveró (2012)

El conocimiento del ordenamiento jurídico- penal no debe entenderse como un conocimiento pleno de todo el conjunto de dispositivos jurídico-penales, pues queda claro que conocer toda la legislación penal resulta una exigencia de imposible cumplimiento. En ese sentido, el conocimiento del orden jurídico- penal debe entenderse como una imputación de conocimiento de prohibiciones que están referidas a la preservación de condiciones esenciales para el desarrollo de la persona en sociedad. En términos resumidos, podría decirse que no se trata de imputar el conocimiento de la legislación formal, sino de las normas penales por su contenido material (pág. 639 y 640).

Que todas las personas conozcamos todas las normas penales es algo casi utópico e imposible de suceder concretamente en la realidad, máxime si se trata de personas carentes de conocimientos jurídicos; en tal sentido, lo que se es necesario es al menos



conocer las nociones elementales sobre las prohibiciones a las que se debe sujetar nuestro comportamiento.

García Caveró (2012)

En la doctrina penal se ha discutido si la capacidad de conocer el ordenamiento jurídico- penal debe considerarse un aspecto de la misma imputabilidad o si se trata de otro elemento de la culpabilidad. Los que sostienen lo primero señalan que quien no conoce el orden jurídico debe ser tratado como inimputable, en la medida que no tiene la capacidad de comprender el sentido de su hecho. Para los segundos se trataría de un supuesto de error, generado por la falta de conocimiento de la normatividad penal (pág. 641).

Como comentábamos en la cita anterior, se estima que todas las personas, si bien en cierto no conocemos la totalidad de normas penales, al menos tenemos una noción sobre los comportamientos de los cuales debemos abstenernos; en tan sentido, no tiene razón de ser que una persona sea considerada como inimputable ante la falta de conocimiento de las normas penales, pues insistimos, por sentido común y las máximas de la experiencias las personas podemos prever que nuestro comportamiento se ajuste a las normas establecidas.

### **2.3. Violencia familiar**

Tal cual se aprecia de la composición de este capítulo, el contenido doctrinario a recoger se enfoca hacia el ámbito familiar respecto a la comisión de actos relacionados con la violencia en dicho entorno, por lo mismo que se hace necesaria la recopilación de ciertas categorías para su conceptualización y comprensión.



### **2.3.1. Definición de violencia familiar**

En un sentido amplio, se entiende por violencia a la acción o efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. Según lo que se puede distinguir en el diccionario de la Lengua Española; violencia significa:

“Fuerza extrema, o abuso de la fuerza. Fuerza ejercida sobre una persona para obligarla a hacer lo que no quiere. El que obra con ímpetu y fuerza; se deja llevar fácilmente por la ira” (2012).

Si de lo que se habla, es un tipo de fuerza ejercida de una perspectiva del abuso, entonces diremos que tiene un inicio connotativo subjetivo, que es desencadenado por la ira básicamente; entonces en el ámbito familiar como es que se configura, tomaremos la referencia de Corsi, quien describe la violencia familiar del siguiente modo:

El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, entendida como la forma de interacción enmarcada en el contexto de desequilibrio de poder, siendo los dos ejes de desequilibrio de dicho poder dentro de la familia el género y la edad. Además, es necesario subrayar que, para poder definir una situación familiar como un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica; por lo tanto, no están incluidas en la definición las situaciones de maltrato aislado, que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares (2004).

El autor citado nos habla de una connotación familiar revestida de la característica de frecuencia, esto es, no la comprende como hechos aislados que surgen de una posible discusión simple, sino de actos constantes que terminan causando perjuicio a la estructura



familiar.

Pues bien, ya estamos ubicados en el medio familiar y descrita ya la definición conceptual, nos corresponde buscar el detalle de lo que podría significar una suerte de clasificación o puntualización de las formas en que podría generarse este tipo de violencia, por ello tomamos lo plasmado por Ayvar Roldan, al definir a la violencia familiar de la siguiente manera:

La violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño físico y psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; y una de sus características es su cronocidad (2007).

En esta última cita notamos la descripción acumulada de las formas en que puede vulnerarse los principales aspectos de la personalidad como son el físico, psicológico y la libertad de una persona comprendida en el entorno familiar, haciendo notar nuevamente que se requiere de la característica de reiterancia.

Por otro lado, en base a lo que se viene desarrollando también se toma en cuenta la violencia que se genera contra la mujer dentro de una familia debido a que es un ser vulnerable y es más débil y a la vez está propensa a recibir cualquier tipo de violencia por parte de ciertos miembros de la familia, para esto se cita a (Castillo Aparicio, 2017) quién explica de una mejor manera la violencia contra la mujer, como se puede detallar:

Respecto a la definición de violencia contra las mujeres es pertinente señalar que la comisión de justicia y derechos humanos del Congreso de la República deja de lado la expresión “maltrato sin lesión”, incluida originalmente en la Ley N° 26260 (en el entendido que no toda manifestación de violencia necesariamente originará una lesión , pero no por eso debe ignorarse o dejar de investigarse y sancionarse), para utilizar



la expresión “sufrimiento”, pues considera que por más mínima que sea la violencia sufrida por la víctima, siempre habrá un grado de afectación (física o psicológica), y la expresión “sufrimiento” encierra mejor dicho concepto. (p. 28-29)

### **2.3.2. Tipos De Violencia Familiar.**

Será preciso describir los tipos de violencia que se ubican en función a lo hasta ahora desarrollado por la doctrina en función a los efectos verificados en la realidad, experiencia que permite describir los siguientes tipos:

#### **2.3.2.1. El Maltrato Físico.**

Nos encargaremos de ubicar una descripción de este tipo de violencia, y según lo estudiado diremos que el maltrato físico es el acto (acción u omisión) de agresión, que de forma directa o indirecta, causa una afectación material en el cuerpo, salud o actividad vital de la víctima. En este caso, el agresor tiene la intención de inferir un daño, pero también el agresor de la violencia familiar tiene un fin mediato, pues con su agresión lo que busca es someter o posicionarse como superior al agraviado. Entonces se puede decir que según (Castillo Aparicio, 2017) menciona que:

Este tipo de maltrato implica un rango de lesiones muy amplio, que va desde un empujón, hasta lesiones graves con secuelas permanentes o la muerte misma. Así, pues, algunas de estas agresiones físicas consisten en forcejeos, empujones, bofetadas, tracción de cabellos, intentos de



estrangulación, torceduras de brazo, golpes de puño, puntapiés, golpes con objetos, quemaduras, agresión con armas de fuego o punzo-cortantes, hasta el homicidio. Y, obviamente, las consecuencias de este tipo de maltrato van desde hematomas, laceraciones, equimosis, heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, lesiones en órganos internos, hemorragias, abortos, hasta traumatismos craneoencefálicos y la muerte.

(p. 37)

Tomaremos como referencia lo desarrollado por Corante y Navarro, quienes desarrollan de la siguiente manera esta tipología:

El daño físico es el resultado material y corporal que presenta la víctima de maltrato, pudiendo ser de diferentes magnitudes. Su precisión es realizada a través del reconocimiento médico. Para efectos legales de considerar la acción como delito o falta se ha establecido que las lesiones que requieran más de 10 días de asistencia médica o descanso físico son calificadas como acciones delictivas. Las lesiones que solo alcancen asistencia o descanso de 10 días se consideran faltas contra la persona (2004).

Todo tipo de violencia debe merecer reproche, así lo entendemos no sólo a nivel nacional sino internacional, las cortes supranacionales también han contemplado este aspecto enfocado como forma de discriminación, recogemos tal idea de la investigación realizada por Ramírez Huaroto, en la que obtiene como resultado de su análisis la siguiente afirmación:

“(…) cabe destacar que en el SIDH se ha reconocido que ciertos grupos de mujeres padecen de discriminación en base a más de un factor a lo largo de su vida, en virtud de su corta edad, su raza y su origen étnico, entre otros, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de violencia (2011). La



vulnerabilidad puede estar asociada a la edad (2014) o a la condición de ser indígena (2010).

Entendiendo el problema que genera la violencia física, si bien es uno de los más frecuentes en las familias, razón por la que en algunos casos llega a producir hasta la muerte, si bien, se considera como físico a las agresiones que hacen directamente el cuerpo de la víctima, sin embargo también existe un maltrato sin lesión el cual de acuerdo a (Castillo Aparicio, 2017) se basa en:

La clásica figura del maltrato sin lesión es el abandono que consiste en el acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud. Este abuso se manifiesta en situaciones diversas y está referido al incumplimiento de obligaciones hacia uno o varios miembros de la familia, por parte de quien está obligado a proveer cuidados y protección. Puede relacionarse con la higiene, la nutrición, cuidados rutinarios, atención emocional, necesidades médica no resueltas o atendidas tardíamente en exposición a peligro. Así, pues el maltrato sin lesión es una situación en que sin presentarse un daño físico (tal como una lesión, un hematoma, contusión, etc.) en la víctima, existe un maltrato por algún acto negligente en la conducta del victimario. (p. 39)

Por otro lado, también se considera como parte de la violencia física al maltrato por negligencia el cual radica en el “descuido o privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para la recuperación de la víctima”. (Castillo Aparicio, 2017)



### **2.3.2.2. El Maltrato psicológico:**

El maltrato psicológico o violencia psicológica que sufre una persona en su psique y más aún en el ejercicio de su libertad; alterando su equilibrio psicológico, su sensación de bienestar. Es definida por la *Organización Radda Barner*, organización no gubernamental creada en Estocolmo-Suecia, la cual su función principal es salvaguardar los derechos del niño.

Hablando un poco más de la violencia o maltrato psicológico se dice que es todo acto que afecta de manera emocional a la otra persona, estos actos se dan mayormente en el vínculo familiar, donde los afectados son los seres más vulnerables y son ellos quienes sufren las consecuencias de los sucesos que se generan a través de este tipo de violencia. Para esto se toma en cuenta la percepción de (Paredes Siccía, 2016) donde menciona que:

Esta clase de violencia se suele manifestar a través del maltrato verbal, de burlas en lugares públicos y privados, insultos, gritos. La violencia psicológica puede resultar tan igual e incluso más perjudicial que la violencia física, pues si esta es muy severa, puede conllevar a verdaderos trastornos del subconsciente; la violencia psicológica es aquella acción u omisión que se produce con la finalidad de controlar y degradar las acciones comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, caracterizada por empleo de insultos, humillaciones, descalificativos, indiferencia, desautorización, intimidación, manipulación, amenazas, aislamiento o cualquier otro tipo de conducta que produzca un perjuicio en la salud psicológica o en el desarrollo integral de la persona sobre la que se ejerce. (p. 134)



El maltrato psicológico, según el investigador Ayvar Roldan C. lo define como:

Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la persona, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta omisión que implique un perjuicio de la salud psicológica, el desarrollo integral o la autodeterminación del ser humano (2007).

Quizás, el daño psicológico sea el único que se presente en toda forma de expresión de la violencia familiar. El maltrato psicológico implica la afectación emocional que sufre la víctima ante la conducta violenta del agresor. Sea la forma en que se manifieste dicha conducta agresiva: física, verbal, sexual, económica, etc., la víctima siempre padecerá del temor, ansiedad, depresión, desesperación, inseguridad, desvalorización y demás afectaciones emocionales propias del maltrato psicológico.

Entonces, pues, este tipo de maltrato consiste en la acción u omisión que provoca, en quien lo recibe, alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos.

De acuerdo al tema que se viene tratando en la presente investigación también se hace mención a (Echeburua & De Corral, 2010) quien nos dice:

Es así que la violencia psíquica se caracteriza por la presencia continuada de intimidación o de amenazas, por el recurso a humillaciones graves y reiteradas, que contribuyen a socavar la autoestima de la víctima, por la imposición del aislamiento social, por el sometimiento a restricciones económicas graves (cuando ella carece de recursos propios), por la desvalorización total como persona (calificándola, por ejemplo, de loca) o



por un acoso continuado. (p. 137-138)

Por otra parte, también se cita a (Castillo, 2018) en su libro titulado La prueba en el delito de violencia contra la mujer y el grupo familiar menciona:

De modo que, la violencia psicológica comprende un gran abanico de conductas empleadas por el agresor. Según a quien se dirija este tipo de violencia, el agresor utilizara un tipo u otro de estrategia. Follingstad y otros, establecieron una clasificación de seis tipos principales de maltrato emocional o psicológico: i) ridiculización, humillación, amenazas verbales e insultos; ii) aislamiento tanto social como económico; iii) celos y posesividad; iv) amenazas verbales de maltrato, daño o tortura, dirigidas tanto hacia el otro cónyuge como hacia los hijos, otros familiares o amigos; v) amenazas repetidas de divorcio, de abandono o de tener una aventura; vi) destrucción o daño de las propiedades personales a las que se les tiene afecto. Por último, la culpabilización a la víctima de ello. (p. 45)

De este modo los autores (Hernández, Magro, & Cuéllar, 2014) definen a la violencia psicológica como:

La violencia psicológica es el soporte esencial en que se sustenta el maltratador para conseguir el control total sobre la víctima, minando su autoestima mediante un progresivo y lento proceso de adaptación paradójica a la situación de maltrato, demostrándole su poder y autoridad y produciéndole una permanente situación de indefensión aprendida, que propicia que la mujer valore la necesidad de permanecer sumisa e inmóvil frente al agresor, como única forma de escapar al castigo. Este tipo de violencia «tangible», pero paradójicamente «invisible», puede causar en la



víctima trastornos psicosomáticos severos, trastornos de personalidad por desestructuración psíquica, agravar enfermedades físicas preexistentes, inducir al consumo de alcohol, drogas o medicamentos no prescritos facultativamente e, incluso, provocar el suicidio. (p. 34)

Por otro lado (Magro Servet, 2006) habla acerca del maltrato psicológico de acuerdo a una entidad clínica para tratar estos daños, en base a esto menciona que:

El maltrato emocional o psicológico, como entidad clínica autónoma, a diferencia del maltrato o violencia física o sexual, para ser más fácilmente probado y sin negar la importancia del impacto o daño emocional que, concreta y puntualmente puede producir un episodio aislado de maltrato, debe ser habitual, reiterado, proyectándose de forma sistemática en el tiempo. Es en realidad un proceso o ciclo. En este sentido, resultan esclarecedores ciertos conceptos de «violencia psíquica» acuñados por algunos juzgados y tribunales españoles. Entre los cuales, y sin perjuicio de una mayor concreción en el apartado correspondiente a criterios jurisprudenciales, destacamos los siguientes:

- a. Una aproximación al concepto jurídico de violencia psíquica ha de incluir los actos u omisiones, así como (también) las expresiones, que producen o tienden a producir desvalorización o sufrimiento, limitación de la libertad del otro o cualquier forma de ataque a su dignidad o integridad moral, independientemente de que con ello se produzca o no una lesión psíquica, sea en la misma persona o en otras que, por su relación con la víctima, indirectamente, pueden sufrir el



mismo resultado.

- b. El hecho de que sólo se aporte como prueba la declaración de la (propia) víctima no debe determinar, ni mucho menos la falta de credibilidad en su declaración, por el hecho de que no esté corroborada por la declaración de testigos que no tengan relación familiar con ella. Por ello, la declaración de hechos probados conlleva la comisión de un delito de maltrato habitual del Art. 173.2 cp, en la modalidad psicológica, al crear en la víctima una situación de miedo y angustia..., lo que determina la tipificación del delito de maltrato psicológico habitual en base a las expresiones dirigidas contra la víctima de forma constante, con absoluto menosprecio a la condición de la víctima por el mero hecho de ser mujer.

El maltrato psicológico también incluye episodios de intimidación, comentarios despectivos y humillaciones.

Según los investigadores Salas Beteta y Baldeon Sosa: “En esta segunda fase de "crisis", el agresor descarga su tensión con acciones violentas físicas, psicológicas o sexuales; perdiendo toda forma de comunicación y entendimiento” (2009).

Entonces de acuerdo a un artículo en la revista *Ocultos a Plena Luz* publicada por la (Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, s.f) toma como concepto de violencia emocional o psicológica lo siguiente:

La violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico, puede darse en una multitud de formas, como por ejemplo: atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar,



insultar, humillar o ridiculizar a un niño. Puede tratarse asimismo de no prestarle apoyo emocional, desatender sus necesidades educativas o médicas, exponerle a violencia doméstica y acoso psicológico o someterle a novatadas. Tampoco podemos olvidar las prácticas extremas de violencia emocional, como el aislamiento y otras formas degradantes de reclusión. Si bien la angustia o el daño emocional son, a menudo, consecuencia de haber sufrido violencia física o sexual, los niños también son blanco de actos de agresión psicológica o verbal. (p. 3)

Resulta imprescindible tomar en cuenta la comunicación a través de las redes sociales, la que hoy en día es conocida como comunicación electrónica, medio por el cual es utilizado también para generar agresión psicológica sobre todo en las parejas que llevan una relación o que ya no están juntos. Para tener un mejor entendimiento de lo que trata se tomara en cuenta el aporte de (Fuentes Soriano, 2017) quien menciona que:

Todas las comunicaciones a que se hace referencia podrán quedar englobadas en lo que comúnmente denominamos “comunicaciones electrónicas”, pues todas ellas se desarrollan o se materializan a través de internet; sin embargo, bajo esta denominación encuentran referencia mecanismos comunicadores muy diferentes y que presentarán, en consecuencia, peculiaridades probatorias a las que habrá que atender. En todo caso, también hay que tener presente que las propias características de cada sistema comunicador, plataforma de comunicación, aplicación o mecanismo, en suma, de intercambio de información personal hace que su uso se vaya especializando en formas concretas de relación interpersonal. Así, si bien es cierto que, por ejemplo, el correo electrónico está quedando



como forma habitual de comunicación en relaciones comerciales o empresariales, mecanismos más ágiles como whatsapp o incluso instagram, en lo que a representaciones graficas respecta, se utilizan para relaciones de carácter personal erigiéndose así, por tanto, en mecanismos especialmente idóneos para perpetrar agresiones en el seno de la pareja o expareja (...). (p. 387 – 388)

Desarrollando más a fondo a cerca de lo que sería el daño psicológico se toma en cuenta la postura desarrollada por (Castillo, 2018) quien hace referencia lo siguiente:

Se entiende como daño psíquico o psicológico, por un lado, a las lesiones psíquicas agudas producidas por un hecho (delito) violento que en algunos casos puede remitir (desaparecer) con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento social o un tratamiento psicológico adecuado, y, por otro, a las secuelas emocionales que persisten en la personas de forma crónica como consecuencia del suceso sufrido y que intervienen negativamente en su vida cotidiana. En ambos casos, es la consecuencia de un suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación. El daño psicológico se refiere, por un lado, a las lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento; y, por otro, a las secuelas emocionales que pueden persistir en la víctima de forma crónica y que interfieren negativamente en su vida cotidiana. Cuando se produce el daño psíquico, se ve alterada la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación. (p. 104)

De este mismo modo se considera a (Galvez Villegas & Rojas León, 2017) quienes desarrollan su aporte como se detalla a continuación:



Como puede apreciarse, se considera no solo los daños ocasionados por hechos violentos, sino también los causados por una pluralidad de maltratos o conjunto de situaciones propias de casos de violencia familiar o de género, que son los considerados en la nueva legislación. Al respecto, dicha Guía se refiere a las distintas formas de violencia precisando que estas pueden ser: violencia psicológica, consistentes en actos tendientes o controlar o aislar así como humillar o avergonzar a la víctima; violencia sexual, consistente en realizar actos de naturaleza sexual contra una o más personas o hacer que estas realicen un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica, el abuso de poder o aprovechando un entorno de coacción o de incapacidad de las personas de dar su consentimiento genuino, etc. Asimismo, también considera la violencia ejercida contra menores, incapaces o ancianos, como personas especialmente vulnerables dentro de las relaciones familiares y sociales. (p. 961-962)

La preocupación de nuestra investigación esta justamente basada en este aspecto, para lo cual en el desarrollo deberá tratarse la crítica a la ley que se ha creado para la erradicación de la violencia enfocándolo al ámbito psicológico, pues se están haciendo muchas críticas a tal regla jurídica, entre ellas tenemos a Alvarez Olazabal, quien dice sobre el particular:

Prueba de ello es que, si bien el art. 26 de la Ley establece que para la calificación del daño físico y psíquico de la víctima, la certificación médica debe ser acorde a los parámetros médico legales, con información detallada de los resultados de tales evaluaciones, consignando necesariamente la calificación de días de atención facultativa como de



incapacidad, sin embargo aún a la fecha, los certificados médico legales expedidos por los psicólogos del IML, contienen la siguiente observación a pie de página:

Debido a que aún no se cuenta con un reglamento y guía adecuada a las precisiones de la ley 30364, la presente pericia se sujeta y realiza según los alcances del protocolo establecido por la Guía de Psicología Forense para casos de Violencia Familiar RN° 1064-2013-MP-FN (sic) (pág. 502)

Cuando la violencia psicológica se presenta consecutivamente, se genera un daño psíquico en la víctima como consecuencia de haber sufrido algún tipo de acto violento que la deja humillada e incapaz para enfrentar los hechos de la vida diaria a nivel de ser humano, para esto se hará mención a (Peña Cabrera Freyre, 2017) quien se refiere al daño psíquico de la siguiente manera:

Se dice que las lesiones psíquicas más frecuentes son los trastornos adaptivos (con estado de ánimo deprimido o ansioso), el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. Más en concreto, a un nivel cognitivo, la víctima puede sentirse confusa y tener dificultades para tomar decisiones, con una percepción profunda de indefensión (de estar a merced de todo tipo de peligro) y de incontrolabilidad (de carecer de control sobre su propia vida y su futuro); sin duda, este tipo de afectaciones tiende a propiciar un estado de desconfianza hacia el resto, impidiendo –a presente y futuro- que sus relaciones con terceros puedan desarrollarse bajo un clima de armonía. (p. 423)

Consecuencia de la violencia psicológica o psíquica es que en la víctima se presentan o quedan marcadas a modo de cicatrices las secuelas emocionales, las cuales



afectan en gran manera en el desarrollo de la persona como tal quien ha sufrido el maltrato psicológico, hecho que no permite que la víctima logre superar durante mucho tiempo las consecuencias de ello, de este modo se cita a (Galvez Villegas & Rojas León, 2017) detallando acerca de las secuelas emocionales de la siguiente manera:

Las secuelas emocionales, a modo de cicatrices psicológicas, se refieren a la estabilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual o, dicho en términos legales más imprecisos conceptualmente, de un menoscabo de la salud mental. Las alteraciones psíquicas más frecuentes en las víctimas de sucesos violentos se refieren a la modificación permanente de la personalidad, es decir, a la aparición o a la acentuación marcada de rasgos de personalidad nuevos, estables e inadaptivos (por ejemplo, dependencia emocional, suspicacia o irritabilidad) que se mantienen durante al menos 2 años y que llevan a un deterioro de las relaciones interpersonales y a una falta de rendimiento en la actividad laboral. Esta transformación persistente de la personalidad puede ser un estado crónico o construir una secuela irreversible de un trastorno de estrés postraumático complejo, que puede surgir como consecuencia de haber sufrido un suceso violento o una revictimización.

(p. 965-966)

Se puede apreciar que estamos realmente ante un problema que requiere atención urgente, por ello y teniendo en cuenta que la violencia psicológica desarrolla una amplia gama de posibilidades respecto de sus efectos o su acción sobre la subjetividad humana, será prudente entonces, desarrollar algunos de estos aspectos como manifestaciones del



maltrato psicológico, para lo cual tenemos lo siguiente:

#### **a.- La amenaza y la Intimidación.-**

Sobre esta manifestación de la violencia psicológica el Dr. Bramont Arias, hace un particular desarrollo indicando lo siguiente:

La amenaza; la misma que debe ser seria y continuada; seria en el sentido de la posibilidad cierta de la realización del daño por parte de la persona de quien emana la amenaza, y la posibilidad lógica de que se efectúe el mal amenazado; y continuada, en el sentido de que el agente la mantenga hasta el último momento. En resumen, sostiene que, conforme a la común doctrina, aquella que es capaz de rechazar o hacer negatoria la fuerza física o moral por la cual se trata de vencer a la mujer (1995).

La intimidación consiste en la generación de temor a una persona con el fin de someter o controlar su voluntad.

Se puede lograr intimidar a una persona a través de miradas, gestos o acciones, como, por ejemplo, destrozamiento de objetos personales, tocar violentamente o tirar la puerta, ostentar armas, etc.

La ley peruana de violencia familiar nos habla acerca de la amenaza, que se da cuando una persona manifiesta quererle hacer un mal a otro, y de la coacción grave y/o reiterada que se produce cuando el victimario obliga o impide a la víctima hacer o dejar de hacer lo que la ley no manda o lo que no prohíbe, utilizando diversos medios. Cabe precisar que se considera "grave" cuando se vulneran derechos o bienes jurídicos protegidos por la ley y que son considerados de gran importancia tales como la libertad, la dignidad personal, el honor o buena reputación, etc. Y es reiterada cuando esta coacción se produce de manera repetitiva.



### **b.- Las Humillaciones.-**

Se considera humillación cualquier tipo de acto que denigre a un ser humano, al igual que su cultura, su dignidad, su sexo, su origen étnico, su religión, su pensamiento, su nivel económico, sus conocimientos, sus preferencias sexuales, etcétera. Algunas formas de tortura van acompañadas de humillaciones públicas que buscan perjudicar la dignidad del sujeto.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo consideran la humillación como una forma de tortura pasiva que viola los derechos humanos. La humillación es considerada como una forma de acoso, especialmente aplicada en contexto escolar o laboral.

### **c.- El control de la vida de la otra persona.-**

El agresor busca controlar la voluntad y el comportamiento de la víctima, celándola constantemente, ejerciendo un posesivo control de su vida, vigilando sus actos, sus relaciones (por ejemplo, a quién puede ver, con quién puede hablar, qué puede leer, a dónde va). Aquí tenemos el caso del marido, que, por celos obsesivos, no le permite a su cónyuge que desempeñe estudios superiores o que trabaje por su cuenta, o le prohíbe que hable con el casero del mercado o con las vecinas.

### **d.- El Aislamiento.-**

El agresor busca aislar a la víctima del entorno social, a efectos de hacerla sentir



indefensa, mantener su control sobre ella y, al mismo tiempo, evitar que ésta pueda dar a conocer la opresión bajo la cual se encuentra. El aislamiento se logra limitando las salidas y movimientos de la víctima, prohibiéndole ver amigos o familiares, sometiéndola a silencios prolongados.

#### **e.- El Abuso Verbal.-**

Expresado por medio de gritos, insultos, insistencia en los defectos de la víctima, burlas, críticas a lo que hace o dice, ironías, ridiculizaciones, sobrenombres ofensivos, utilización de 29 juegos mentales para confundir, acusaciones sin fundamento, entre otros. Como se indica, en realidad, tenemos que la violencia psicológica o emocional puede darse antes, después o durante el abuso físico. Sin embargo, no siempre que hay violencia psicológica ocurre una agresión física y por lo mismo, no siempre se reconoce su presencia.

#### **2.3.2.3. El Maltrato sin Lesión**

La Ley N° 30364 de Protección Frente a la Violencia Familiar, considera como forma de violencia familiar, al maltrato sin lesión; aunque su reglamento no ha especificado sus alcances. La clásica figura del maltrato sin lesión es el abandono que consiste en el:

"acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud".

Este abuso se manifiesta en situaciones diversas y está referido al incumplimiento de obligaciones hacia uno o varios miembros de la familia, por parte de quien está obligado



a proveer cuidados y protección. Puede relacionarse con la higiene, la nutrición, cuidados rutinarios, atención emocional, necesidades médicas no resueltas o atendidas tardíamente o exposición a peligro. Pero también hablamos de maltrato sin lesión, cuando un golpe no deja huellas de lesiones traumáticas, como, por ejemplo, las agresiones con una toalla mojada, que causan un dolor considerable, pero que no dejan marcas en el cuerpo de la víctima.

Así pues, el maltrato sin lesión es una situación en que sin presentarse un daño físico (tal como una lesión, hematoma, contusión, etc.) en la víctima, existe un maltrato por algún acto negligente en la conducta del victimario.

Este maltrato sin lesión se da en el caso del victimario, obligado por la ley a responsabilizarse de ciertas obligaciones, se desentienden de ellas, por ejemplo: el abandono del padre de familia frente a la alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones riesgosas y/o cuidados médicos de sus hijos o cónyuge. Esta negligencia trae como consecuencia retrasos importantes en el desarrollo intelectual, físico y social del niño y adolescente, que requieren atención especializada.

Cuando se identifica un acto de violencia del tipo que sea, lo que generalmente se buscan son pruebas para que se pueda acusar al agresor, de este modo hacer justicia y dar su lugar a la víctima, de esto es que se hablara a continuación gracias al aporte de (Di corleto & Piqué, 2017) quiénes detallan lo siguiente:

Cuando se reflexiona sobre el trámite de los casos que involucran violencia basada en el género, uno de los primeros temas que surge es el de la prueba ya que, por lo general, se juzgan situaciones que transcurren en espacios



cerrados y de intimidad, sin espectadores. Por lo tanto, en la investigación no suele ser fácil recabar los elementos probatorios tradicionales, que son además que la doctrina y la jurisprudencia fácilmente validan, tales como testimonios de personas sin relaciones con la víctima o el imputado, registros fílmicos o documentales, o evidencia física. (p. 412 – 413)

De a lo mencionado anteriormente como se puede observar la violencia de género es un problema a nivel mundial, sin embargo hoy en día existen medidas para prevenir y controlar esta dificultad, tal es el caso de nuestro país en el cual ya se ha ido implementando medidas cautelares que contrarrestan el problema de la violencia, para entender mejor se cita a (Cerezo Domínguez, 2017) quien desarrolla su aporte de la siguiente manera:

Tras el análisis llevado a cabo podemos concluir que las órdenes de protección, uno de los recursos estrella de la actual regulación de la violencia sobre la mujer pareja, se ha ido consolidado en nuestro país con el paso del tiempo. Su componente es mayoritariamente penal, siendo el alejamiento y la prohibición de comunicación las medidas penales más utilizadas. Sin embargo, los datos consultados permiten afirmar que en los últimos años los jueces están concediendo en menor medida órdenes de protección (...) con todo no puede olvidarse que la eficacia de la protección que suministran las medidas contenidas en estas órdenes, en concreto las medidas de alejamiento, se ha puesto en duda por tanto las organizaciones de mujeres como por todas las instancias involucradas en su implementación. A pesar de ello los datos estadísticos muestran que en los últimos años se podría estar afinando más respecto a su eficacia, ya que



es menor el porcentaje de víctimas que mueren con una orden de alejamiento en vigor. Pese a todas las dificultades expuestas, las víctimas expresan su satisfacción en cuanto se sienten protegidas por el sistema. (p. 463 – 464)



## CAPÍTULO III

### LA PROTECCIÓN DEL DAÑO PSICOLÓGICO Y PSÍQUICO

#### 3.1. Configuración Legal para la Calificación del Daño Psicológico.

Nuestra actual Constitución Política del Perú, establece en el artículo 2°, numeral 24 inciso h), que “*nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes*”. En vista a ello y a propósito de ola de actos delincuenciales violencia contra la mujer, el 6 de noviembre de 2015 se emite la Ley N°30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”; la misma que en su artículo 8° clasifica los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, constituidos por: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica o patrimonial. Para el desarrollo de nuestro planteamiento definiremos lo que constituye violencia psicológica según la ley en mención: “b) Violencia psicológica. Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. (...)” (El Peruano, 2015, pág. 567009)

Los sucesos generadores de daño psicológico suelen ser la amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica, una lesión física grave, la percepción del daño como intencionado y la pérdida violenta de un ser querido. A continuación, recogeremos una definición doctrinaria sobre daño psicológico que nos presentan los autores extranjeros Pynoos, Sorenson y Steinberg (1993):



El daño psicológico se refiere, por un lado, a las lesiones psíquicas producidas por un delito violento; y por otro, a las secuelas emocionales que pueden persistir en la víctima de forma crónica y que interfieren negativamente en su vida cotidiana. Lo que está alterado, en definitiva, es la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación (Pynoos, Steinberg, & Sorenson, 1993).

### **3.1. 1. Determinación del Daño Psíquico.**

En la Ley N°30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” se define el daño psíquico de la siguiente manera:

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo (El Peruano, pág. 567009).

De los conceptos recopilados en cuanto al daño psicológico y el daño psíquico, en el transcurso de nuestra investigación nos encargaremos de definir los lineamientos necesarios para determinar cuál es el nivel de congruencia entre tales para la configuración del delito de lesiones leves por violencia familiar.

## **3.2. Políticas Criminales Para Proteger A Las Víctimas De Violencia**

### **3.2.1. Concepto de políticas criminales**

Según se puede apreciar en el informe elaborado por el Observatorio de Política Criminal (2015), concibe a la política criminal de la siguiente manera:



El conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica (pág. 4).

Podemos definir ampliamente la política criminal como la organización política de los medios para reducir la ocurrencia de delitos u otras situaciones problemáticas vinculadas a la seguridad de una población. Retomando los argumentos de Zaffaroni (2012) en base al libro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se dice que “la política criminal puede entonces ser concebida como la ciencia o arte de seleccionar los bienes —o los derechos— que deben ser objeto de una tutela jurídica, o penal, y escoger la manera de lograr dicha tutela” (pág. 214).

### **3.2.2. Políticas criminales sobre violencia familiar**

Las políticas criminales que ha establecido el Estado Peruano para proteger a las víctimas de violencia familiar, son tema de atención central, pues sin la formulación e implementación de éstas sería difícil lograr algún avance en la disminución de este problema.

Es así que en nuestro ordenamiento legal encontramos las siguientes políticas criminales:



- a) Ley 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en la cual se establece la creación y gestión de los hogares de refugio temporal, los programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas y también otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, esto se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, pág. 5).
- b) “Plan Nacional Contra la Violencia de Género”, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, el cual tiene como propósito desarrollar una serie de medidas para reducir y/o erradicar la violencia contra las mujeres, entre las cuales tenemos el fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en servicio del profesorado para la prevención de la violencia de género; implementación de acciones de prevención de la violencia de género en la comunidad educativa: padres y madres de familia, docentes, personal administrativo y estudiantes; diseño e implementación de una estrategia comunicacional nacional para prevenir la violencia de género, articulada a nivel intersectorial, interinstitucional e intergubernamental; fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes comunitarios dinamizadores para promover cambios en los patrones socioculturales que generan violencia de género; implementación de lineamientos y guías metodológicas para la prevención de la violencia de género en las familias y la comunidad, desde los sectores institucionales estatales, gobiernos regionales y locales, etc. (Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, págs. 11-14).
- c) Ley N° 28983 – Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que tiene como propósito establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los



ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad (Ley N° 28983, pág. 1).

- d) Acuerdo Nacional convocado por el ex presidente Alejandro Toledo Manrique, el cual en su décimo sexta política de estado aborda el fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud, teniendo como uno de sus objetivos prevenir todas las formas de violencia familiar, así como de maltrato y explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su erradicación; también a institucionalizar políticas multisectoriales para la reducción de la violencia familiar y juvenil (Acuerdo Nacional, pág. 29).
- e) Creación del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que tiene entre sus funciones gestionar la información sobre la incidencia de delitos, infracciones a la ley penal y violencia familiar, especificando su magnitud, características y factores que inciden en su disminución, mantenimiento o incremento (Observatorio de Criminalidad, 2017).
- f) Creación del Centro de Atención Institucional frente a la violencia familiar (CAI), implementado por el MIMP, el cual tiene como función brindar atención especializada e integral a hombres con sentencia en violencia familiar a fin de reconstruir nuevos modelos igualitarios entre hombres y mujeres (Manual de operaciones programa nacional contra la violencia familiar y sexual, pág. 21).



g) Centro Emergencia Mujer, brindan atención integral para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y /o sexual, asimismo realizan acciones de prevención de la violencia familiar y sexual y promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos (Manual de operaciones programa nacional contra la violencia familiar y sexual, pág. 20).

### **3.3. Las medidas de protección en la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.**

La Ley 30364 fue aprobada el 22 de noviembre del 2015, derogando a la ya desfasada Ley N° 26260 – Ley de protección frente a la violencia familiar.

Esta ley en su Artículo 5 define la violencia contra las mujeres, tomando como referencia la definición esbozada en la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, reconociendo que la violencia no se limita al ámbito doméstico, pues puede ocurrir en el ámbito público (pág. 2).

Reconoce en su Artículo 9 el derecho de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar de una vida libre de violencia y a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados.

En su Artículo 8 define como tipos de violencia contra las mujeres y el grupo familiar a la violencia física, psicológica, sexual y económica, esta última es una novedad, pues anteriormente no estaba reconocida en ningún dispositivo normativo nacional (pág. 2).

Se reconocen distintos derechos a las víctimas de violencia, el que más salta a la luz es el derecho al acceso a la información, el cual establece que las víctimas pleno derecho a



recibir información acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia, así como a un asesoramiento adecuado con relación a su situación personal (pág. 3).

Resulta positivo que se haya establecido en el artículo 15 la obligación por parte de la Policía Nacional del Perú de comunicar los actos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías a nivel nacional, en un máximo de 24 horas al juzgado de familia o al juzgado que cumpla sus funciones. Asimismo, la norma señala en su artículo 16 que el juzgado de familia tiene la obligación de resolver en un máximo de 72 horas las medidas de protección que son necesarias de ser otorgadas a la víctima para proteger su integridad (pág. 4).

Además, se contempla que la resolución de medidas de protección debe darse en una audiencia oral, lo que garantiza que el juzgado conozca de forma inmediata la situación de la víctima. También, resulta positivo que en esta misma audiencia el juzgado pueda pronunciarse sobre las medidas cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, entre otros, porque esto agiliza el otorgamiento de las mismas.

Asimismo, se contempla que finalizado el proceso y probados los actos que constituyen violencia hacia la mujer o integrantes del grupo familiar pero no se configuran como delitos, el juzgado de familia pueda sancionar al agresor, por ejemplo, mediante una medida de reeducación en temas de género. Evidentemente si son actos que se configuran como delitos, la investigación la realiza la fiscalía penal, pudiendo obtenerse una vez finalizado el proceso una sanción privativa de la libertad (pág. 4).

El artículo 19 de la nueva ley es positivo porque obliga a que la declaración de niñas, niños, adolescentes y mujeres se realice mediante la técnica de entrevista única y se constituya como prueba pre constituida. A su vez, da la opción para que el fiscal dictamine



que, a un varón mayor de edad, integrante del grupo familiar y víctima de violencia, también pueda aplicársele esta técnica.

### **3.3.1. Crítica A La Eficacia De Las Medidas**

Tal como lo indica la investigadora Valega Cristina (2015) en su obra titulada: *Avanzamos contra la indiferencia: Comentarios a la Nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar*, en el cual se aprecia el siguiente comentario:

Resulta favorable la incorporación normativa de que la policía deba tener un mapa geográfico y geo referencial del registro de víctimas de violencia que se encuentran con medidas de protección, así como la habilitación de un canal directo con las mismas para atender a sus pedidos de resguardo, pues esto no había sido contemplado por ningún mecanismo normativo nacional anteriormente, sin embargo, la situación de las medidas de protección de nuestro país viene siendo muy precaria (pág. 4)

Se precisa como una posible solución que se fiscalice el otorgamiento de recursos económicos a la policía para que pueda implementar estrategias, mecanismos y logística necesarias para que se cumpla con las medidas de protección dictadas en los procesos, además hace falta que los administradores de justicia mantengan comunicación constante con la policía y está le informe si efectivamente se está dando cumplimiento a las medidas otorgadas o si por el contrario tienen dificultades para ejecutarlas, no solo se trata de dictar las medidas de protección a favor de las víctimas y dar por terminado el proceso, es necesario que se dé cumplimiento y que las víctimas sientan que realmente la violencia va a cesar y no van a tener represalias en su contra por haber denunciado a su agresor.



### **3.3.2. Ley de protección contra el daño o violencia familiar en EEUU**

Los esfuerzos bipartidistas para garantizar la seguridad de todas las víctimas de violencia doméstica deben continuar tras la aprobación en el Congreso de la prórroga a la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) el 28 de febrero de 2013, señaló Human Rights Watch. La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia y servicios por parte de víctimas de distinta procedencia social, ahora, los esfuerzos sucesivos deberían impulsar también la protección de inmigrantes que son víctimas de violencia cuando se inicie el proceso de reforma integral del sistema migratorio, indicó Human Rights Watch.

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes aborda los obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia que son miembros de tribus indígenas estadounidenses cuando intentan acceder a la justicia. Y en forma moderada las protecciones para víctimas inmigrantes. Las iniciativas para prorrogar la VAWA durante el último período de sesiones del Congreso se vieron estancadas debido a diferencias sobre estos puntos entre la Cámara de Representantes y el Senado.

“El Congreso se reunió en el día de hoy y puso a un lado las diferencias partidarias para dar prioridad a la protección de las víctimas de violencia”, aseveró Meghan Rhoad, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Si mantiene esta postura de cooperación, el Congreso podrá profundizar los esfuerzos para asegurar que todas las personas tengan acceso a justicia, servicios y seguridad”.

La VAWA es la principal ley federal que contempla garantías y servicios legales para contrarrestar los abusos domésticos, la violencia sexual y el acoso. El Congreso ha



prorrogado la VAWA en dos ocasiones desde que fue sancionada originalmente en 1994. El 12 de febrero de 2013, el Senado aprobó con 78 votos a favor el proyecto S. 47, una iniciativa impulsada por ambas bancadas para prorrogar la VAWA. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto S. 47 con una mayoría de 286 contra 138 votos. La Cámara efectuó la votación tras rechazar otro proyecto de ley que habría atenuado las protecciones para las víctimas, expresó Human Rights Watch.

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes aborda aspectos sobre competencia que obstaculizan la posibilidad de procesar a hombres que no pertenecen a la población aborígen estadounidense por actos de violencia cometidos contra mujeres de estas comunidades. El proyecto restablecería la competencia de los tribunales tribales de la población de aborígenes estadounidenses en estos casos cuando los hechos de violencia doméstica y la violencia en el marco de vínculos de pareja se produzcan en territorios tribales. Actualmente, ni las autoridades estatales ni tribales tienen competencia en estas situaciones. A pesar de que el gobierno federal sí tiene competencia, a menudo no considera prioritario el juzgamiento de delitos menores vinculados con la violencia que se manifiesta en el ámbito doméstico y las relaciones de pareja.

El proyecto de prórroga de la VAWA incluye disposiciones contra la discriminación que procuran garantizar el acceso igualitario a servicios indispensables.

La norma amplía las protecciones destinadas a mujeres inmigrantes al incorporar el acoso a la lista de delitos graves contemplados para la visa de tipo “U”, de carácter temporario, que permite a inmigrantes que son víctimas de delitos graves permanecer en Estados Unidos para brindar asistencia a las autoridades de aplicación de la ley durante la investigación y el juzgamiento del hecho.



“El debate sobre una reforma migratoria integral ofrecerá otra oportunidad para que los legisladores brinden carácter prioritario a la seguridad de las víctimas de violencia”, señaló Rhoad. “Entre otras medidas importantes, el programa de visas de tipo “U” debería expandirse para que las víctimas de violencia que son inmigrantes no se vean nuevamente obligadas a elegir entre ser deportadas o tolerar una vida de abusos”.

### **3.3.3. En Ecuador:**

Regulación de los delitos por violencia intrafamiliar en el Ecuador, previo a la vigencia del Código Orgánico Integral Penal Históricamente la mujer ha sido considerada como un género inferior en comparación con el hombre. Muchos factores sociales, políticos e incluso religiosos han contribuido a aquello; de tal manera que siempre han estado sujetas a tratos denigrantes y discriminatorios. El movimiento proteccionista a la mujer y a los miembros del núcleo familiar se ve intensificado en la época de los años 80, cuando los movimientos activistas reclaman la creación de políticas estatales que protejan de manera especial a estos grupos que a lo largo de la historia han sido violentados. Antes de la década de los 90, la violencia intrafamiliar en el Ecuador no era considerada como un problema de interés público, sino que más bien se encuadraba en la mentalidad social como un problema doméstico, lo que propiciaba el cometimiento de actos violatorios, que carecían de sanciones y protección especializada a la mujer y a los miembros del núcleo familiar. En la época de los años 90, cuando Sixto Durán Ballén funge como presidente de la República, se comienza la instauración de las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia. Sin embargo, estas dependencias funcionaban como organizaciones no gubernamentales que carecían de respaldo legal que permitiese iniciar acciones por delitos de género y violencia intrafamiliar. A pesar de la limitación que tenían dichas



Comisarías, su presencia motivó la discusión parlamentaria para la creación de un cuerpo normativo que viabilice la protección a la mujer y la sanción a la violencia. De igual manera, la corriente proteccionista internacional se ve reflejada en la suscripción de la Convención Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer. Dicha convención fue ratificada por el Ecuador el 30 de junio de 1995, y dentro de la historia jurídica del país se la UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 27 Milene Quishpe Jacho considera como antecedente directo que impulsa la creación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. De esta manera, la Dirección Nacional de la Mujer (Hoy denominada Consejo Nacional de Mujeres “CONAMU”) en conjunto con organizaciones de mujeres y la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia (que constituía una de las comisiones del Congreso Nacional); coordinaron la creación de la Ley No. 103 denominada “Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia”. Esta ley fue aprobada el 29 de noviembre del 1995, y publicada en el Registro Oficial el 11 de diciembre del mismo año. Esta ley viabilizaba el conocimiento de casos de violencia intrafamiliar, de tal manera que se logren dos objetivos: por un lado, la sanción ante infracciones cometidas a la mujer y a los miembros del grupo familiar, y por otro el establecimiento de medidas de amparo que interrumpan o mitiguen la agresión cometida. En cuanto a la normativa penal propiamente dicha previo a la vigencia del COIP, el Código Penal carecía de una regulación específica en materia de violencia psicológica. Únicamente el Código de Procedimiento Penal, en su libro Quinto hacía alusión a la violencia intrafamiliar, considerándola como contravención de juzgamiento especializado, de esta manera el art. 393 enunciaba: Art. 393.- Jueces especiales.- Las contravenciones militares, policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar o de cualquiera otra naturaleza, serán juzgadas por los jueces especiales respectivos. Por este motivo, las formas de violencia intrafamiliar, entre ellas la violencia



psicológica, debían ser juzgadas conforme a lo establecido en la Ley 103. La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su art. 4 nos presenta definiciones legales de los diferentes tipos de violencia. Dicha ley definía a la violencia psicológica como: Art. 4.- “Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la auto estima de la UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 28 Milene Quishpe Jacho mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado” La definición que proporciona la Ley 103 se encasilla con las definiciones doctrinales antes mencionadas. Sin embargo, la mencionada ley carece de un sistema de escalas que permitan graduar la pena de acuerdo a la gravedad de la afección psíquica.

### 3.2 Incorporación de la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar como delito en el Código Orgánico Integral Penal

El Código Orgánico Integral Penal surge como una respuesta ante la imperante necesidad de unificar la legislación penal en el Ecuador y la adaptación de la normativa a las realidades socio-jurídicas actuales, mediante derogación de leyes obsoletas, incorporación de nuevos tipos penales, entre otras reformas. Esta necesidad reformativa responde de igual forma al precepto constitucional contenido en el art. 84 de la Carta Magna que enuncia: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.” Esto



se corrobora dentro de los considerandos del Código Orgánico Integral Penal que señalan:

UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 29 Milene Quishpe Jacho “Que el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social fueron promulgados antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución y que sus normas, deben ser actualizadas y adecuadas a las nuevas exigencias del Estado constitucional de derechos y de justicia”

"Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución." Específicamente hablando del tema de violencia, otro de los considerandos del COIP menciona específicamente la motivación proteccionista del Código que se muestra acorde con las garantías constitucionales del bienestar, buen vivir y el respeto a los derechos fundamentales. De esta manera se menciona: “Que el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia; en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomaran contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.” Una vez confirmado el carácter proteccionista del COIP, hay que resaltar las diferencias en cuanto a regulación de la violencia psicológica se trata. El Código Orgánico Integral Penal, cuya vigencia data de Agosto del 2014, constituye un antes y un después en lo que a historia jurídica respecta. Hoy ya existe una clara diferenciación entre delitos y contravenciones cometidas contra la mujer y miembros del núcleo familiar. UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de



Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 30 Milene Quishpe Jacho En la actualidad, las contravenciones se configuran cuando la agresión no es grave, esto es, que la afección no dura más de tres días. El Art. 159 del COIP sanciona con pena privativa de libertad de siete a 30 días, si las lesiones causadas ocasionan incapacidad de hasta tres días. Estos casos se resuelven en los juzgados de contravenciones de las Unidades Judiciales de la Niñez y la Familia. Al respecto, la antigua Ley 103 consideraba a la violencia dirigida a la mujer como una contravención cuya competencia era atribuida a las comisarías. El COIP sin embargo empieza a definir como delitos a las manifestaciones de violencia física, sexual y psicológica. Según un boletín emitido por la Fiscalía General del Estado: Se considera delito “cuando los actos violentos se repiten una y otra vez, con conocimiento del daño que se genera en la víctima, con toda la gana de hacerlo. El agresor se aprovecha de su posición de poder y de la vulnerabilidad de la persona afectada que puede ser una mujer, u niño, un adolescente o una persona de la tercera edad” (Estado, 2015) El COIP actualmente tipifica como delitos a 3 tipos de violencia: la física (regulada en el art. 156), la psicológica (regulada en el art. 157) y la sexual (regulada en el art. 158) El art. 157 del COIP no solo define los caracteres que configuran la violencia psicológica, sino que por primera vez en la normativa ecuatoriana se hace una graduación de la afectación para la determinación de la pena por parte de los jueces.

### 3.3 Daño según el Código Civil Ecuatoriano

El libro IV del Código Civil constituye el punto de partida en lo que a daño se refiere. El artículo 1453 establece que el daño conferido a otra persona es fuente de obligaciones cuando menciona: Art. 1453.- “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 31 Milene Quishpe Jacho ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los



cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia” El daño constituye una forma de adquirir obligaciones; pero que, a diferencia de otras fuentes como el concurso de voluntades o la voluntad unilateral, el daño no depende de la voluntad de quien se obliga. El Dr. Ricardo Villagrán al respecto señala: “la generación de la obligación de ningún modo depende de la voluntad del individuo que ha causado el daño. Por ejemplo, si rompemos un vidrio, estamos en obligación de repararlo, sea que haya sido a propósito, o que hubiere ocurrido por accidente. Sea que queramos pagar por el daño o no”. (Villagrán, 2015) En definitiva, la normativa civil establece que el daño sea cual fuere su categoría implica una obligación que amerita reparación, sin posibilidad de alegar la inintencionalidad del acto cometido en miras al cese de la responsabilidad. De igual forma, la legislación civil realiza una mención acerca de las personas que están llamadas a responder por un daño, cuando menciona: “Art. 2229: Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Están especialmente obligados a esta reparación: 1. El que provoca explosiones o combustión en forma imprudente; 2. El que dispara imprudentemente un arma de fuego; 3. El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche; UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 32 Milene Quishpe Jacho 4. El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él; y, 5. El que fabricare y pusiere en circulación productos, objetos o artefactos que, por defectos de elaboración o de construcción, causaren accidentes, responderá de los respectivos daños y perjuicios.” De la norma se pueden colegir varios aspectos: • En primer lugar es una regla que se



aplica a toda clase de daño sin diferenciación • En segundo lugar la reparación cabe en la medida que se pueda atribuir malicia o negligencia al que ocasiona el daño • En tercer lugar los casos enumerados no son taxativos ni excluyentes, por lo que bien se podría obligar a reparar ante casos no comprendidos en la enumeración antes mencionada. En efecto la obligación podría hacerse extensiva a herederos, responsables solidarios, padres, tutores, jefes de colegios, entre otros individuos detallados a lo largo del libro IV Ahora, en cuanto al nacimiento del daño personal en específico, el Código Civil no realiza de manera expresa una diferenciación que permita identificar el ámbito de aplicación de las normas. Al respecto el Dr. Villagrán intenta resolver esta interrogante cuando enuncia: “Como el texto del Art. 2229 del Código Civil hace referencia a “todo daño”, no habría razón para limitar la acción de indemnización solamente a los casos de daño patrimonial, sino también a los casos de daño personal” (Villagrán, 2015) De igual manera señala “el Art. 2231 ibídem establece que Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral” (Villagrán, 2015)

UNIVERSIDAD DE CUENCA Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales 33 Milene Quishpe Jacho Sobre el perjuicio moral, recordemos que hasta antes de 1984 solo podía reclamar indemnización el que sufría perjuicio sobre sus bienes patrimoniales, mas hoy la protección legal se extiende también a las afecciones personales.

### **3.3.4. En Chile**

En Chile, la Ley 20.066 - Ley de Violencia Intrafamiliar, señala en el artículo 5° “Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una



relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. En esta definición se hace referencia al maltrato que afecte la vida o la integridad de una persona, lo que en cuestión de términos, una afectación es más amplia que un daño y, por consiguiente abarca una mayor protección a la integridad y salud de la persona que en el caso de la definición de nuestra legislación; además es más inclusiva, explícitamente se refiere a los otros grupos vulnerables, como son los niños y adolescentes, personas de la tercera edad y a las personas con alguna minusvalía aunque no tengan relación de parentesco entre ellos.

### **3.3.5. En Colombia**

Donde lo que entendemos por violencia familiar se ha tipificado como delito, la Ley 294 de 1996, Ley sobre violencia intrafamiliar, señala en el artículo 3, literales: b) Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar<sup>15</sup>. Esta legislación en definitiva abarca una mayor protección a la integridad y salud de la víctima que la nuestra, porque toma en cuenta la protección de las personas que dentro de una familia además de ser víctimas, “puedan



llegar a ser víctimas” de daño físico o síquico, incluyendo además sin hacer mención del daño, a las personas que sean o puedan ser víctimas de amenaza, de maltrato, de agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa de otro integrante de la unidad familiar.

### **3.3.6. En España**

España se suma a la lucha activa contra la violencia familiar por la aprobación de la ley 27/2003, de 31 de julio; reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, así como el II Plan Nacional de medidas contra la violencia doméstica 2001/2004, en el marco del Observatorio Nacional de la violencia doméstica y de género.

Aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, entro en rigor defendiendo una serie de medidas de protección integral contra la violencia familiar y el abuso de género.

Dos años más tarde de la aprobación de esta ley integral se desarrollaron diversas actuaciones a nivel estatal, entre ellas el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, aprobado el 16 de junio de 2006 y el Plan Nacional De Sensibilización Y Prevención De La Violencia De Género 2007-2008, aprobado por el consejo de ministros.

En el primero de estos se reconoce que los menores que viven en entornos en los que se sufre violencia de género se encuentran en situación de riesgo y desprotección social, por lo que se proponen distintas medidas mejorando el marco legislativo español con el objetivo de proteger a las víctimas de este abuso y que se desarrollen en un ambiente sano.



## **CAPÍTULO IV**

### **ANÁLISIS Y RESULTADOS**

#### **Análisis de los parámetros en la determinación del daño psicológico y psíquico.**

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal.

#### **4.1. Análisis de los resultados:**

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

##### **4.1.1. Resultados de la observación de los parámetros para la determinación del daño psicológico y psíquico en las víctimas de violencia familiar.**

Actualmente, solo se cuenta con la “Guía de Psicología Forense para la evaluación en casos de violencia familiar” aprobada mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1064-2013-MP-FN, la cual es aplicable a niños(as), adolescentes y adultos, cuyos objetivos son: en primer lugar, el determinar los indicadores emocionales y conductuales que fundamenten las conclusiones referidas a la existencia del maltrato psicológico; y, en segundo lugar, establecer las características de desarrollo psicosocial (en menores de edad) y rasgos de personalidad (en adultos), para lo cual emplean diferentes técnicas e instrumentos. Esta evaluación se plasma en el protocolo de pericia psicológica que



permite actualmente a los fiscales de familia probar el estado de la víctima en la vía de carácter tuitivo, mas no recurrir a la vía penal.

### **El daño psíquico como victimización criminal:**

Evaluar el impacto psíquico derivado de la exposición a una supuesta situación de victimización criminal implica un amplio manejo por parte del perito de la psicopatología asociada a la vivencia traumática; así se puede ubicar en lo indicado por Echeburúa Enrique (2004) en su libro titulado *Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos*, en el que señala:

Siguiendo la perspectiva traumatogénica, una situación de victimización criminal es un estresor psicosocial de primera magnitud en la vida de una persona, ya que es algo infrecuente en las experiencias humanas, desborda las estrategias de afrontamiento del sujeto y supone un grave riesgo para su seguridad. Estas situaciones son experimentadas, en la mayoría de los casos, con una fuerte emocionalidad negativa (vivencia traumática), susceptible de desestabilizar el estado psicológico del sujeto ( Echeburúa, 2004)



#### 4.1.2. Resultados del análisis estadístico.

Para la observación desde la perspectiva estadística, se solicitó la información correspondiente a la oficina del Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, la cual fue otorgada en tablas que a continuación se detallan.

*Tabla 1: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2015 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque.*

AÑO 2015	
Órgano jurisdiccional	Cantidad de Expedientes
1° JUZGADO DE FAMILIA	690
2° JUZGADO DE FAMILIA	708
3° JUZGADO DE FAMILIA	684
4° JUZGADO DE FAMILIA	589
5° JUZGADO DE FAMILIA	206
6° JUZGADO DE FAMILIA	261
7° JUZGADO DE FAMILIA-SEDE CENTRO CIVICO	73
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO- SEDE CENTRO CÍVICO	74
TOTAL	3285



Tabla 2: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2016 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque

AÑO 2016	
Órgano jurisdiccional	Cantidad de Expedientes
1° JUZGADO DE FAMILIA	1391
2° JUZGADO DE FAMILIA	1153
3° JUZGADO DE FAMILIA	1047
4° JUZGADO DE FAMILIA	1077
5° JUZGADO DE FAMILIA	564
6° JUZGADO DE FAMILIA	561
7° JUZGADO DE FAMILIA- SEDE CENTRO CIVICO	15
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO- SEDE CENTRO CÍVICO	15
TOTAL	5823

Tabla 3: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2017 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque

AÑO 2017	
Órgano jurisdiccional	Cantidad de Expedientes



1° JUZGADO DE FAMILIA	1011
2° JUZGADO DE FAMILIA	1069
3° JUZGADO DE FAMILIA	1017
4° JUZGADO DE FAMILIA	1081
5° JUZGADO DE FAMILIA	1087
6° JUZGADO DE FAMILIA	1081
7° JUZGADO DE FAMILIA- SEDE CENTRO CIVICO	248
JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO- SEDE CENTRO CÍVICO	278
TOTAL	6872

**Elaborado: Ofic. Estadística - CSJLA Fuente: SIJ**

*Tabla 4: Cuadro estadístico de la cantidad de procesos por violencia familiar atendidos en el año 2018 en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque*

AÑO 2018	
Órgano jurisdiccional	Cantidad de Expedientes
1° JUZGADO DE FAMILIA	824



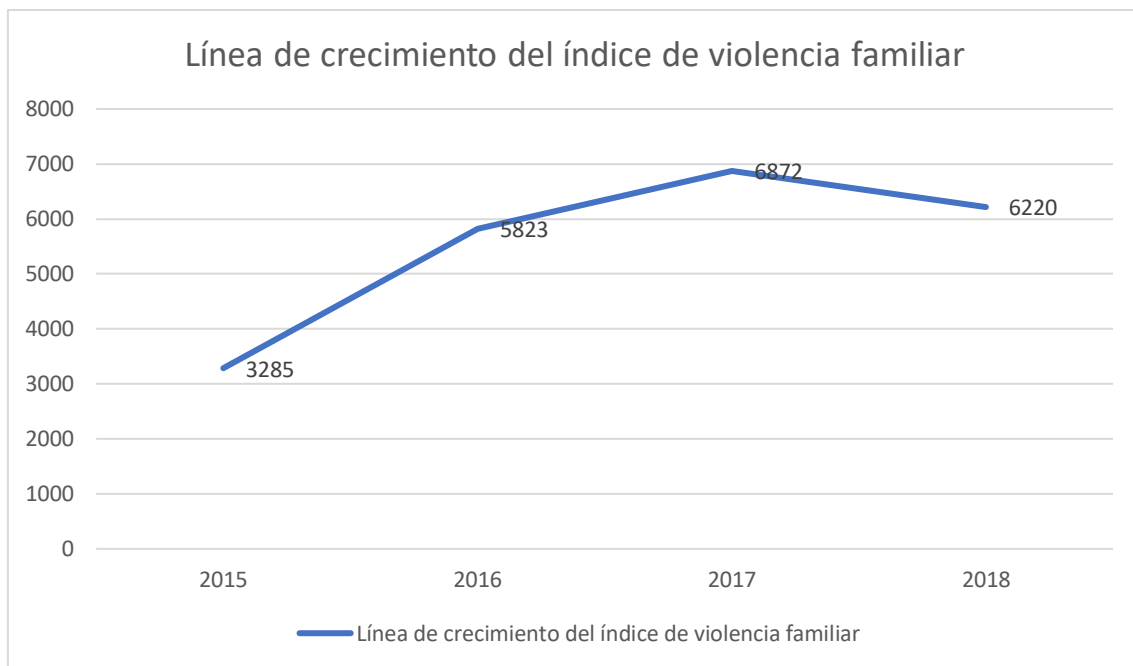
2° JUZGADO DE FAMILIA	1085
3° JUZGADO DE FAMILIA	821
4° JUZGADO DE FAMILIA	920
5° JUZGADO DE FAMILIA	835
6° JUZGADO DE FAMILIA	900
7° JUZGADO DE FAMILIA-SEDE CENTRO CIVICO	835
<b>TOTAL</b>	<b>6220</b>

**Elaborado: Ofic. Estadística - CSJLA Fuente: SIJ**

*Tabla 5: Cuadro consolidado de los resultados estadísticos sobre la atención de expedientes por violencia familiar en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo en el distrito judicial de Lambayeque, entre los años 2015 -2018.*

CONSOLIDADO 2015-2018	
AÑO	Cantidad de Expedientes
2015	3285
2016	5823
2017	6872
2018	6220





**Corte Superior de Justicia de  
Lambayeque  
Modulo Judicial Integrado Sub Especialidad en Violencia  
Familiar**

DEPENDENCIA	Carga procesal		
	2018	Al 30 abril - 2019	TOTAL
8° Juzg. Familia - Violencia Familiar	353	610	963
9° Juzg. Familia - Violencia Familiar	353	612	965
10° Juzg. Familia - Violencia Familiar	354	611	965
11° Juzg. Familia - Violencia Familiar	353	611	964
12° Juzg. Familia - Violencia Familiar	354	609	963
13° Juzg. Familia - Violencia Familiar	354	611	965
14° Juzg. Familia - Violencia Familiar	353	611	964
<b>TOTAL</b>	<b>2474</b>	<b>4275</b>	<b>6749</b>



**\* El Modulo Judicial integrado inició sus labores el 15 de octubre 2018**

#### **4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.**

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N°01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

*Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque*

<b>1. Un daño psicológico resulta más reprochable penalmente que un daño psíquico en su nivel leve.</b>	
<b>ALTERNATIVA</b>	<b>CANTIDAD</b>
a. De Acuerdo	<b>25</b>
b. En Desacuerdo	<b>25</b>
c. NO Opina	<b>00</b>



**TOTAL**

**Descripción: Cuadro N° 01**, a la pregunta planteada Un daño psicológico resulta más reprochable penalmente que un daño psíquico en su nivel leve; de un total de 50 muestras realizadas, 25 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 25 de ellos indicaron No estar de acuerdo.

*Ilustración 1: Gráfico porcentual del Resultado de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque.*





Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque

<b>2. La estructura jurídica para la determinación del daño psíquico subsume la calificación inicial de daño psicológico.</b>	
<b>ALTERNATIVA</b>	<b>CANTIDAD</b>
d. De Acuerdo	<b>39</b>
e. En Desacuerdo	<b>07</b>
f. NO Opina	<b>04</b>
	<b>50</b>
<b>TOTAL</b>	

**Descripción:** Cuadro N° 02, a la pregunta planteada: La estructura jurídica para la determinación del daño psíquico subsume la calificación inicial de daño psicológico; de un total de 50 muestras realizadas, 39 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 07 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 04 No opinaron al respecto.



*Ilustración 2: Gráfico porcentual del Resultado de la afirmación N° 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque*

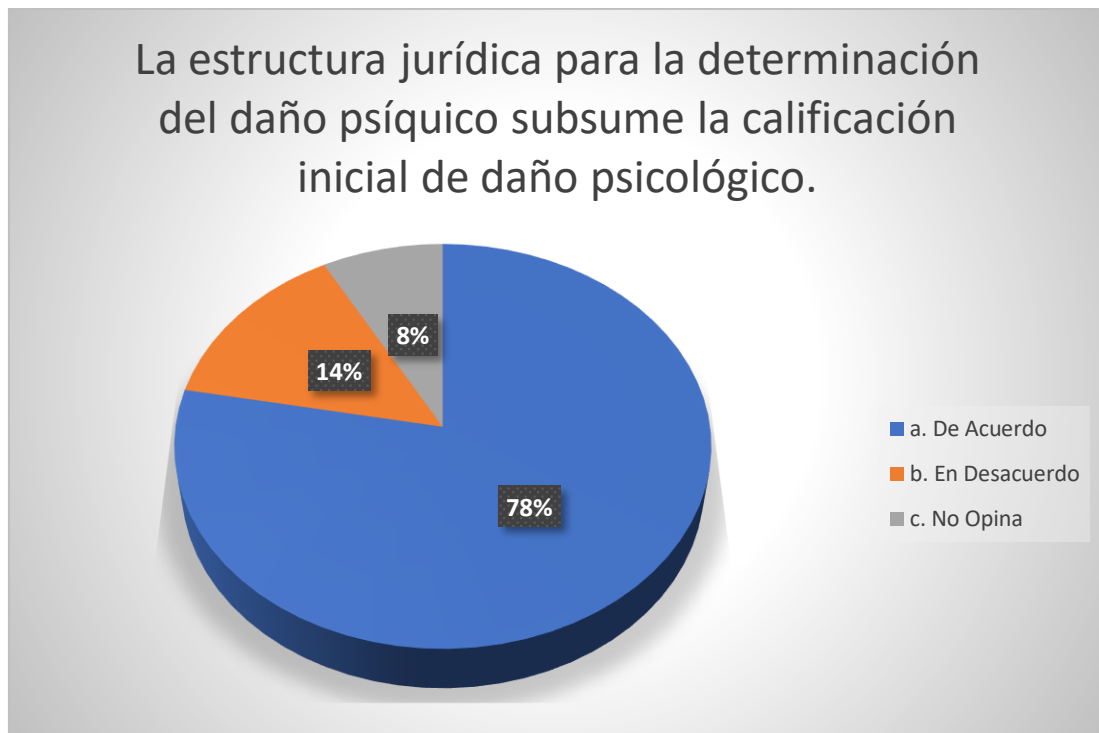




Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque

<b>3. Siendo un requisito para la determinación del daño psíquico, haber transcurrido seis meses desde el hecho de violencia, este plazo debe reducirse, de acuerdo a las condiciones de la víctima, para la determinación inmediata de dicho daño</b>	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
g. De Acuerdo	<b>40</b>
h. En Desacuerdo	<b>07</b>
i. NO Opina	<b>03</b>
	<b>50</b>
<b>TOTAL</b>	

**Descripción: Cuadro N° 03**, a la pregunta planteada: Siendo un requisito para la determinación del daño psíquico, haber transcurrido seis meses desde el hecho de violencia, este plazo debe reducirse, de acuerdo a las condiciones de la víctima, para la determinación inmediata de dicho daño; de un total de 50 muestras realizadas, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 07 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto.



*Ilustración 3: Grafico porcentual del Resultado de la afirmación N°3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque*

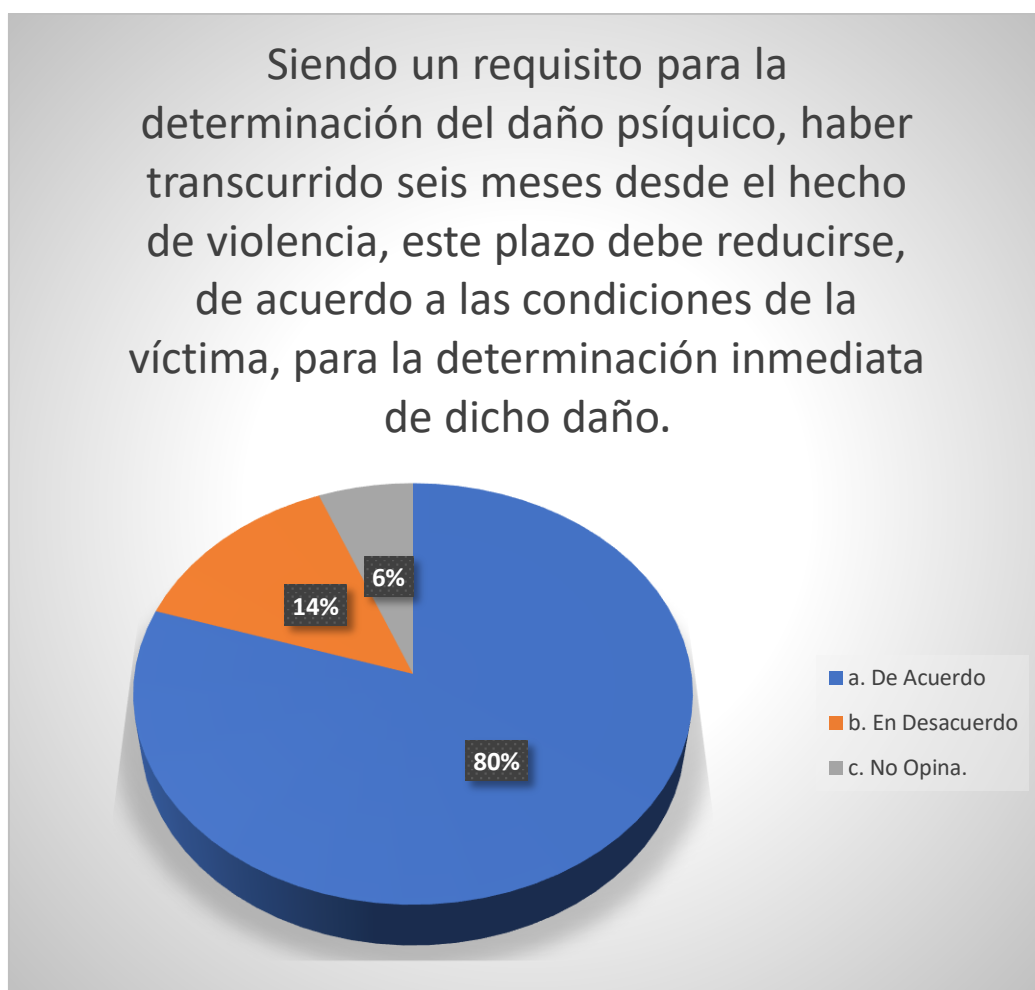




Tabla 9: Resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque

<b>4. Para conseguir una correcta determinación de la afectación psicológica como requisito de agresión, se requerirá la modificación de la estructura típica prescrita en el Art. 122-B del Código Penal, a fin de asegurar su sanción y la protección posterior a la violencia.</b>	
<b>ALTERNATIVA</b>	<b>CANTIDAD</b>
j. De Acuerdo	<b>42</b>
k. En Desacuerdo	<b>08</b>
l. NO Opina	<b>00</b>
	<b>50</b>
<b>TOTAL</b>	

**Descripción: Cuadro N° 04**, a la pregunta planteada: Para conseguir una correcta determinación de la afectación psicológica como requisito de agresión, se requerirá la modificación de la estructura típica prescrita en el Art. 122-B del Código Penal, a fin de asegurar su sanción y la protección posterior a la violencia; de un total de 50 encuestados, 42 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 08 de ellos indicaron No estar de acuerdo.



*Ilustración 4: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque*

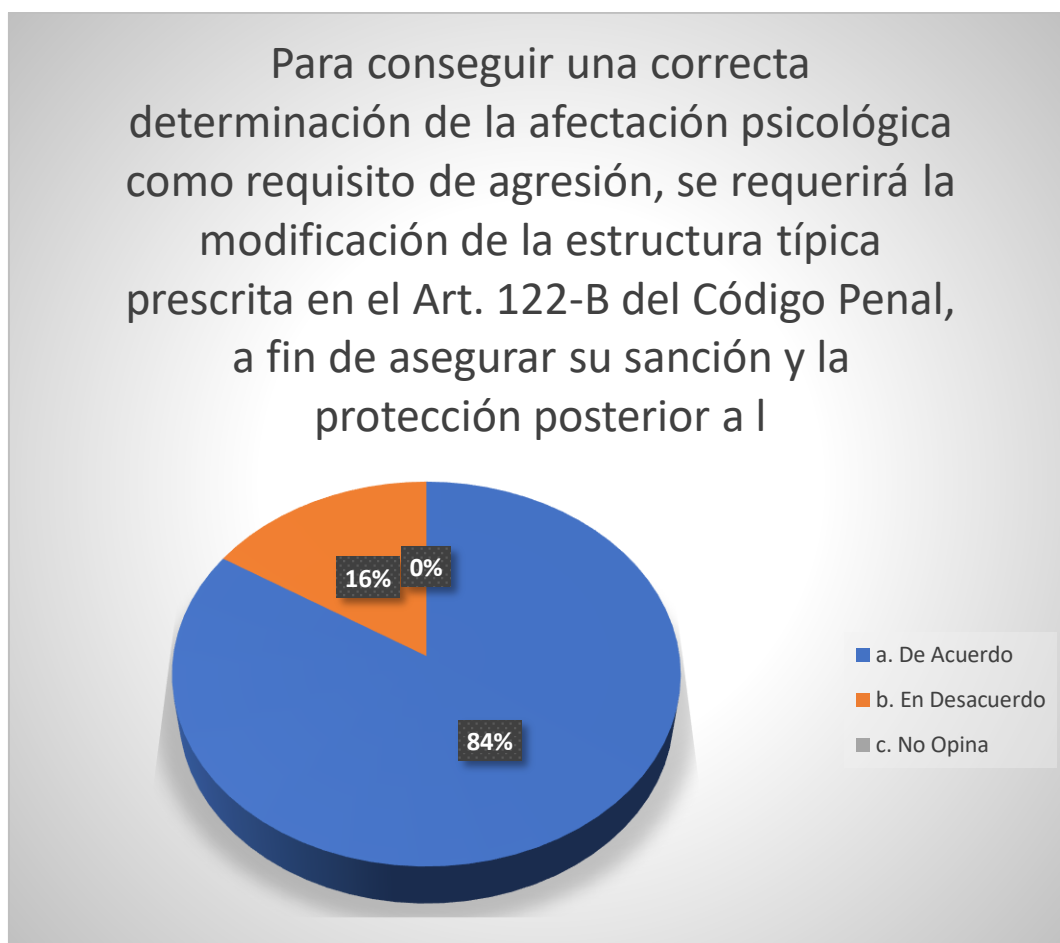




Tabla 10: Resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque

**5. La estructura procesal encaminada a la imputación de lesiones leves por violencia familiar por daño psíquico, en el distrito judicial de Lambayeque carece de eficacia puesto que no se determinada de manera oportuna dicho daño, reduciéndose sólo a la imputación del delito previsto en el Art. 122-B del Código Penal.**

ALTERNATIVA	CANTIDAD
m. De Acuerdo	43
n. En Desacuerdo	03
o. NO Opina	04
	50
<b>TOTAL</b>	

**Descripción: Cuadro N° 05**, a la pregunta planteada: La estructura procesal encaminada a la imputación de lesiones leves por violencia familiar por daño psíquico, en el distrito judicial de Lambayeque carece de eficacia puesto que no se determinada de manera oportuna dicho daño, reduciéndose sólo a la imputación del delito previsto en el Art. 122-B del Código Penal; de un total de 50 encuestados, 43 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 03 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 04 No opinaron.



*Ilustración 5: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque*

**5. La estructura procesal encaminada a la imputación de lesiones leves por violencia familiar por daño psíquico, en el distrito judicial de Lambayeque carece de eficacia puesto que no se determina de manera oportuna dicho daño, reduciéndose sólo a la i**

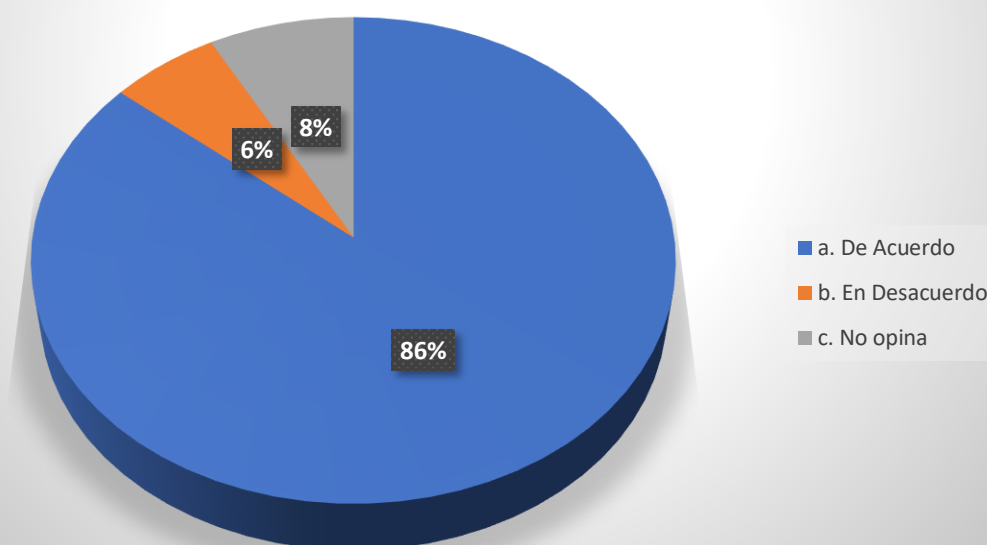




Tabla 11: Resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque

**06. Se requiere que tanto las medidas de protección, como la evaluación del hecho delictivo, para su determinación típica, correspondan a la tarea del Ministerio Público a fin de garantizar un correcto examen en razón de las capacidades de investigación.**

ALTERNATIVA	CANTIDAD
p. De Acuerdo	41
q. En Desacuerdo	08
r. NO Opina	01
	50
<b>TOTAL</b>	

**Descripción:** Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: Se requiere que tanto las medidas de protección, como la evaluación del hecho delictivo, para su determinación típica, correspondan a la tarea del Ministerio Público a fin de garantizar un correcto examen en razón de las capacidades de investigación; de un total de 50 muestras realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 08 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 01 No opinaron.



*Ilustración 6: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque*

**6. Se requiere que tanto las medidas de protección, como la evaluación del hecho delictivo, para su determinación típica, correspondan a la tarea del Ministerio Público a fin de garantizar un correcto examen en razón de las capacidades de investigación**

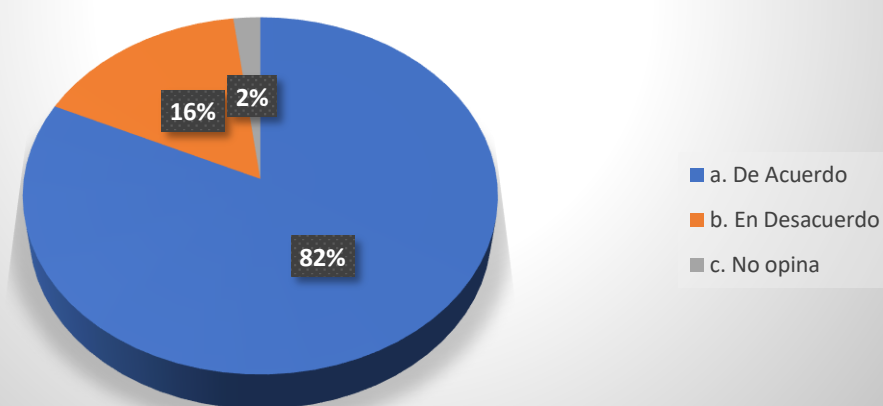




Tabla 12: Resultado de la afirmación N° 7 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque

**07. La configuración de la regla que determina la afectación psíquica debe establecer como parámetro estándar de análisis, lo que la ciencia psicológica indica para el reconocimiento de la lesión psicológica cuyo resultado permita la correcta imputación y consecuentemente sanción al hecho de violencia familiar.**

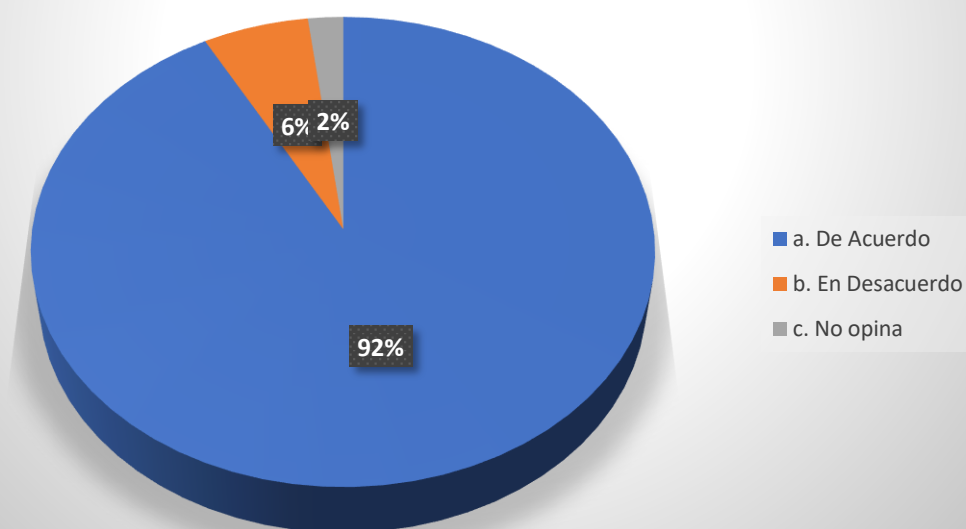
ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	46
b. En Desacuerdo	03
c. NO Opina	01
	50
<b>TOTAL</b>	

**Descripción: Cuadro N° 06**, a la pregunta planteada: La configuración de la regla que determina la afectación psíquica debe establecer como parámetro estándar de análisis, lo que la ciencia psicológica indica para el reconocimiento de la lesión psicológica cuyo resultado permita la correcta imputación y consecuentemente sanción al hecho de violencia familiar; de un total de 50 muestras realizadas, 46 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 03 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 01 No opinaron.



*Ilustración 7: Gráfico porcentual del resultado de la afirmación N° 7 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque*

**7. La configuración de la regla que determina la afectación psíquica debe establecer como parámetro estándar de análisis, lo que la ciencia psicológica indica para el reconocimiento de la lesión psicológica cuyo resultado permita la correcta imputación y**





## CAPÍTULO V

### CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

#### 5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir la adopción de posturas jurídicas firmes que permitan la validación de las variables y con ello la construcción de la hipótesis final.

##### 5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la justificación jurídica para la imputación de lesiones leves por violencia familiar”

De conformidad con el desarrollo teórico de la investigación se ha considerado prudente iniciar la discusión en base a objetivo específico primero que se ocupa de la justificación jurídica para la imputación de lesiones leves por violencia familiar, para lo cual se plantean los siguientes cuestionamientos:

¿Qué acción humana se puede considerar como causante de una lesión?

Conforme se ha podido analizar de acuerdo a la literatura correspondiente, las lesiones que se presentan obedecen a acciones humanas derivadas de un hacer, que pueden presentarse en la forma de maltrato físico y psicológico, esta última, podría manifestarse en amenazas, intimidación, humillación, sobre control, aislamiento, abuso verbal y maltrato sin lesión, como formas más utilizadas.

¿Cuál es el parámetro jurídico que utiliza la ciencia penal para la determinación del nivel de lesividad de una acción?



De acuerdo a la ciencia penal, el nivel de lesividad de una acción se encuentra determinada respecto de los bienes jurídicos sobre los que recae dicha acción, y la intensidad de la misma, en el presente caso, la integridad personal del sujeto pasivo, manifestada en su integridad física y psicológica, las cuales, de acuerdo al marco legal y procedimental del Ministerio Público, debe ser determinado por el examen médico pericial correspondiente; reconocimiento médico legal, para el caso de lesiones físicas, y pericia psicológica o psíquica, para la determinación del daño psicológico, cognitivo y conductual de la persona.

¿Qué tan apropiada resulta la idea de que las lesiones deben ser categorizadas en función del daño causado como leve, grave y muy grave?

Graduar las lesiones, en sus niveles de leves o graves, obedece a una determinación cuantitativa en un marco establecido por la pericia médica legal respectiva, que importa para el examen de tipicidad, esto es, para la subsunción del hecho en un tipo penal preestablecido en nuestro cuerpo legal sustantivo; en tal sentido, si realizamos dicho graduación en función al daño causado, desde la perspectiva del daño psicológico, esta resulta inútil, toda vez que el Artículo 122-B del Código Penal no ha establecido niveles para dicha afectación que involucre un tratamiento penal diferenciado.

Caso contrario, si nos trasladamos al Artículo 124-B del mismo cuerpo sustantivo, encontramos que el daño psíquico sí se haya graduado, en niveles de leve, grave y muy grave, lo que, en efecto, determina su calificación para ser considerado como delito, para sus niveles de grave y muy grave, pero como falta para su nivel leve; con lo cual podemos advertir, que de dicha categorización deviene en una inconsistente diferenciación típica, ello en razón a que de acuerdo al nivel establecido, lo que se encuentra como lesiones leves o graves o en el peor de los casos ante una insignificante falta.



¿Cuál es la utilidad para la imputación, el hecho de considerar una lesión como leve?

Conforme se ha mencionado, al haberse establecido que una lesión es considerada leve, determina que la imputación estará enmarcada en la formula típica del Artículo 122 del Código Penal, y, por tanto, el agresor será plausible de la consecuencia jurídica prescrita en el citado tipo penal; situación completamente contraria, a considerar, que, ante un resultado de daño psíquico en su nivel leve, esto es, una falta, el agente será sujeto a una pena de menor intensidad, que resulta incongruente con la protección del bien jurídico, integridad psíquica de la víctima.

¿Qué efecto produce la incorporación de la afectación psicológica en el contexto de violencia familiar en el Código Penal, teniendo en cuenta que su primigenio tratamiento se realizó sobre la base de considerarlo una falta, y no un delito?

Se debe tener presente que si bien inicialmente la afectación psicológica de una persona, producto de violencia familiar, era considerarla como falta, fue por el nivel de lesividad que representaba dicho resultado para la integridad de la persona; sin embargo, luego de la incorporación del Artículo 122-B en el Código Penal, se ha podido advertir que la protección de dicho bien jurídico ha sido elevada de nivel, considerando ahora a esta lesión como un delito.

No obstante, se ha podido advertir que dicha modificación ha obedecido a una política criminal de sobre criminalización, sobre la base del clamor social, a fin de crear sosiego en la población, bajo la creencia que el Estado acciona su poder punitivo en contra de la violencia familiar; sin embargo, no se tuvo en consideración de los resultados adversos que se originarían, puesto que como se ha visto, el sistema de justicia ha colapsado, al haberse producido una excesiva carga laboral, con investigaciones y procesos penales “sin futuro”, ya sea por la insignificancia de los hechos denunciados, o porque las



“víctimas”, en gran porcentaje, no coadyuvaron al esclarecimiento de los hechos, originando denuncias inconsistentes, que consecuentemente no pudieron ser llevadas a juzgamiento; y, en otros casos, dichas denuncias fueron utilizadas como medios extorsivos para fines extrapenales, propias de relaciones intrafamiliares, desnaturalizando los fines de protección del referido tipo penal.

### **TOMA DE POSTURA:**

Resulta imprescindible tener en cuenta que, si bien el legislador ha previsto la protección de bienes jurídicos, como el de integridad personal, específicamente, integridad psicológica y psíquica, al amparo de los artículos 122-B y 124-B del Código Penal; sin embargo, como se ha podido apreciar, dicha tipificación ha resultado entre sí incongruente, toda vez que, teniendo en cuenta la magnitud del resultado producido en el sujeto pasivo, es inconcebible considerar que el daño psicológico, previsto en el artículo 122-B, se haya convertido en un delito, obedeciendo a una política populista, en desmedro del Sistema de Justicia.

#### **5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la configuración legal para la calificación del daño psicológico”.**

¿Qué regla y bajo que estructura se califica el daño psicológico?

En el ordenamiento penal recoge el daño psicológico en una especificación final del artículo 124 B donde detalla la forma en que se determina esta afectación, excluyendo la gradación comprendida en su primer párrafo con respecto al daño psíquico, así la calificación habrá de comprenderse incluso por debajo del nivel de leve.

Luego el Artículo 122 –B del Código Penal, que se refiere ya al tipo que sanciona la acción correspondiente a lesión psicológica o afectación cognitiva o conductual, ratifica



la separación del daño psíquico haciendo la especificación del sujeto pasivo que ha de ser una mujer o integrante del grupo familiar; señalando una sanción entre uno a tres años, esto es reprime con este nivel de pena efectiva por una acción que se encuentra, según la calificación del 124- B, por debajo de la falta de lesiones leves, a la cual corresponde una sanción de 40 a 70 jornadas de prestaciones de servicio comunitario según lo indicado en el artículo 441 del Código Penal.

Entonces, se aprecia la principal incongruencia respecto al tratamiento de este tipo de acciones en contra de la estabilidad emocional de la persona, puesto que la sanción considerada en el artículo 122-B del Código Penal, resulta desproporcional a la que se configura en el ordenamiento penal para aquellas acciones calificadas por debajo de las que se consideran faltas en el primer párrafo del artículo 124- B del mismo cuerpo normativo, específicamente en el literal a), referido al nivel leve de daño psíquico.

### **TOMA DE POSTURA:**

En ese orden de ideas, si bien la configuración legal establecida para la calificación del daño psicológico, se encuentra tipificada en el Artículo 122-B del Código Penal, esta resulta desproporcional con relación al tratamiento diferenciado que se le ha dado al nivel leve de daño psíquico considerado como una falta de lesiones leves, toda vez que, conforme se ha podido observar, si tenemos en consideración el resultado lesivo de la acción, daño psíquico, entendida como la alteración y afectación de alguna de las funciones mentales y capacidades de la persona, el grado de reprochabilidad debería ser mayor.

En tal sentido, la calificación jurídica del daño psicológico deviene en incongruente, pues su tipificación como delito y por ende plausible de una pena privativa de la libertad, se desvincula de la cualificación en base a la nocividad de la conducta, y del daño que esta



produce en la víctima, que a todas luces representa de menor magnitud a la del daño psíquico en el niveles establecido como leve en el 124- B del Código Penal.

### **5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar los parámetros en la determinación del daño psíquico.”**

La determinación del daño psíquico en el ordenamiento jurídico peruano se contempla en distintas reglas; es decir, de forma general su determinación en el artículo 124 B, donde más allá de constituir una regla sustantiva como tipo penal, describe la cualificación de este tipo de lesiones en sus niveles entre leve, grave y muy grave; luego esta consideración se traslada al tipo de lesiones leves y graves que en este rubro de afectación psíquica atribuyen la sanción respectiva.

Tal descripción delictiva permite generar una crítica desde el punto de vista de la determinación de la lesión que precisa de una evaluación considerada en el espacio temporal que requiere de la participación del entorno como medio conducente a efectos sobre la estabilidad emocional de la víctima, condición que debería entenderse de modo general, así la consideración de esta protección especial debe comprenderse en función de los niveles de lesión, sin perder de vista la estructura que el Derecho Penal diseña para las penas en cuanto al grado de afectación del bien.

En pocas palabras se puede establecer que la forma en que se cualifica la lesión que corresponde a daño psíquico no es la más adecuada, puesto que sale del marco de calificación de las acciones en función al daño producido, por ende no se encuentra una congruente relación entre la lesión y la sanción.

En ese sentido, se encuentra más que justificada la razón de haber desarrollado de manera doctrinaria la imputación de lesiones leves por violencia familiar, con lo cual ha quedado



corroborado que nuestro sistema de justicia, ante la entrada en vigencia de la Ley N°30364, al no haberse realizado un correcto estudio de la realidad problemática de la violencia familiar, colapsó en todos sus niveles, desde la Policía Nacional del Perú, seguido del Ministerio Público, y el Poder Judicial, evidenciándose la falta de previsibilidad en las modificaciones realizadas por el Legislativo.



## **5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES**

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

### **5.2.1. Respecto a la Variable independiente: Congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico.**

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si la configuración del daño psicológico como delito en el ordenamiento penal resulta congruente con la percepción del daño psíquico, para lo cual ha de tenerse en cuenta que el legislador ha previsto la protección de bienes jurídicos, como el de integridad personal, específicamente, integridad psicológica y psíquica, tipificación que resulta incongruente, toda vez que, teniendo en cuenta la magnitud del resultado producido en el sujeto pasivo, es inconcebible considerar que el daño psicológico, previsto en el artículo 122-B, se haya convertido en un delito, obedeciendo a una política populista, en desmedro del Sistema de Justicia.



Se evidencia además de ello, la desproporcionalidad con relación al tratamiento diferenciado que se le ha dado al nivel leve de daño psíquico considerado como una falta de lesiones leves, toda vez que, conforme se ha podido observar, si tenemos en consideración el resultado lesivo de la acción, daño psíquico, la sanción debería ser mayor.

En tal sentido, la calificación jurídica del daño psicológico deviene en incongruente, pues su tipificación como delito y por ende plausible de una pena privativa de la libertad, se desvincula de la cualificación en base a la nocividad de la conducta, y del daño producido en la víctima, que a todas luces representa de menor magnitud a la del daño psíquico en el nivel establecido como leve en el artículo 124- B del Código Penal; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

**No existe congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico.**

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: Adecuada imputación de lesiones leves por violencia familiar.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado, en la validación anterior se advierte la incongruencia entre la configuración del delito por daño psicológico y la determinación del daño psico en el ordenamiento penal peruano, en base a lo cual se ha podido determinar un problema respecto a la imputación de este tipo de acciones, toda vez que la forma en que se cualifica



la lesión que corresponde a daño psíquico no es la más adecuada, puesto que sale del marco de calificación de las acciones en función al daño producido, por ende no se encuentra una congruente relación entre la lesión y la sanción.

Con lo cual ha quedado corroborado que nuestro sistema de justicia, ante la entrada en vigencia de la Ley N°30364, sin un correcto estudio de la realidad problemática de la violencia familiar, colapsó en todos sus niveles, desde la Policía Nacional del Perú, seguido del Ministerio Público, y el Poder Judicial, evidenciándose la falta de previsibilidad en las modificaciones realizadas por el Legislativo, teniendo como consecuencia un problema que arrastra a la inadecuada imputación de las lesiones leves por violencia familiar; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

**La imputación de lesiones leves por violencia familiar resulta inadecuada.**

### **5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS**

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

**No existe congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico; por lo tanto, esto ocasiona que la imputación de lesiones leves por violencia familiar resulte inadecuada.**



<b>CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS</b>	
<b>HIPOTESIS INICIAL</b>	<b>HIPOTESIS CONCLUSIVA</b>
Si logramos determinar el nivel de congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico; entonces, se asegurará una adecuada imputación del delito de lesiones leves por violencia familiar	No existe congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico; por lo tanto, esto ocasiona que la imputación de lesiones leves por violencia familiar resulte inadecuada.

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada negativamente, pues la hipótesis conclusiva niega el planteamiento inicial, dando por sentado que la configuración del tipo de lesiones por daño psicológico discrepa de la determinación catalogada respecto al daño psíquico, en razón de la desproporcionalidad de la sanción que se establece para este último que se supone esta por encima de las lesiones psicológicas y que estas últimas terminan ubicándose en el ordenamiento penal con una sanción superior sin que exista la justificación basada en el nivel de afectación del bien jurídico protegido, lo cual se presume es la finalidad de la sanción.



## **CONCLUSIONES**

### **PRIMERA:**

Se puede concluir en función al desarrollo doctrinario sobre la justificación jurídica para la imputación de lesiones leves por violencia familiar, que, el legislador ha previsto la protección de bienes jurídicos, como el de integridad personal, específicamente, integridad psicológica y psíquica, al amparo de los artículos 122-B y 124-B del Código Penal; sin embargo, como se ha podido apreciar, dicha tipificación ha resultado entre sí incongruente, toda vez que, teniendo en cuenta la magnitud del resultado producido en el sujeto pasivo, es inconcebible considerar que el daño psicológico, previsto en el artículo 122-B, se haya convertido en un delito, obedeciendo a una política populista, en desmedro del Sistema de Justicia.

### **SEGUNDA:**

Se ha logrado determinar como resultado del estudio de la configuración legal para la calificación del daño psicológico, que, estando tipificada en el Artículo 122-B del Código Penal, resulta desproporcional con relación al tratamiento diferenciado que se le ha dado al nivel leve de daño psíquico considerado como una falta de lesiones leves, toda vez que, conforme se ha podido observar, teniendo en consideración el resultado lesivo de la acción, daño psíquico, entendida como la alteración y afectación de alguna de las funciones mentales y capacidades de la persona, el grado de reprochabilidad debería ser mayor.

### **TERCERA**

De acuerdo al análisis de los parámetros para la determinación del daño psíquico, se puede establecer que la forma en que se cualifica la lesión que corresponde a este daño, no es la



más adecuada, puesto que sale del marco de calificación de las acciones en función al daño producido, por ende, no se encuentra una congruente relación entre la lesión y la sanción. En ese sentido, ha quedado corroborado que nuestro sistema de justicia, ante la entrada en vigencia de la Ley N°30364, al no haberse realizado un correcto estudio de la realidad problemática de la violencia familiar, colapsó en todos sus niveles, desde la Policía Nacional del Perú, seguido del Ministerio Público, y el Poder Judicial, evidenciándose la falta de previsibilidad en las modificaciones realizadas por el Legislativo, teniendo como consecuencia un problema que arrastra a la inadecuada imputación de las lesiones leves por violencia familiar.

#### CUARTA

Finalmente se ha de tener como conclusión general, el razonamiento que marca la incongruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico; particularidad que ocasiona un problema respecto de la imputación que se ejecuta sobre el delito de lesiones leves por violencia familiar.



## **RECOMENDACIONES**

### **PRIMERA:**

Se, recomienda que para la práctica legislativa sobre aspectos tan delicados como lo es la violencia familiar han de concebirse las estrategias políticas basadas en el análisis de la realidad, evitando la intromisión del populismo jurídico.

### **SEGUNDA:**

Se sugiere que la construcción correcta del tipo penal de lesiones psicológicas deberá tener en cuenta el resultado lesivo de la acción, esto es deberá considerarse al daño psicológico, previsto en el artículo 122-B, para que sea sancionado en base al nivel más leve del daño psíquico, evitando la incongruencia en su determinación.

### **TERCERA**

Se recomienda, con la finalidad de direccionar la correcta imputación, que se modifique la legislación referida al daño psicológico para subsumirla al nivel más bajo del daño psíquico, para lo cual se sugiere la siguiente fórmula legal:

## **REGULACIÓN ACTUAL**

### **Artículo 122 – B del Código Penal**

Agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar.- El que de cualquier modo cause (...) algún tipo de afectación psicológica cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar (...)

### **Artículo 124- B del Código Penal**



Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual.- el nivel del daño psíquico es determinado (...), con las siguientes equivalencias:

- a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico
- b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.
- c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico.

La afectación psicológica cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico.

## **REGULACIÓN MODIFICADA**

### Artículo 122 – B del Código Penal

Agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar.- El que de cualquier modo cause (...) algún tipo de afectación psicológica cognitiva o conductual que califique como daño psíquico en su nivel leve, a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar (...)

### Artículo 124- B del Código Penal

Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual.- el nivel del daño psíquico es determinado (...), con las siguientes equivalencias:

- a. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.
- b. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico.



La afectación psicológica cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia.



## ANEXOS

### 1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



## TESIS

### “TITULO”

#### CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

**I. Congruencia entre la calificación del daño psicológico y la determinación del daño psíquico.**

1. Un daño psicológico resulta más reprochable penalmente que un daño psíquico en su nivel leve.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo



- c. No opina
- 2. La estructura jurídica para la determinación del daño psíquico subsume la calificación inicial de daño psicológico.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
- 3. Siendo un requisito para la determinación del daño psíquico, haber transcurrido seis meses desde el hecho de violencia, este plazo debe reducirse, de acuerdo a las condiciones de la víctima, para la determinación inmediata de dicho daño.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
- 4. Para conseguir una correcta determinación de la afectación psicológica como requisito de agresión, se requerirá la modificación de la estructura típica prescrita en el Art. 122-B del Código Penal, a fin de asegurar su sanción y la protección posterior a la violencia.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo



c. No opina.

## **II. Adecuada imputación de lesiones leves por violencia familiar**

5. La estructura procesal encaminada a la imputación de lesiones leves por violencia familiar por daño psíquico, en el distrito judicial de Lambayeque carece de eficacia puesto que no se determinada de manera oportuna dicho daño, reduciéndose sólo a la imputación del delito previsto en el Art. 122-B del Código Penal.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.

6. Se requiere que tanto las medidas de protección, como la evaluación del hecho delictivo, para su determinación típica, correspondan a la tarea del Ministerio Público a fin de garantizar un correcto examen en razón de las capacidades de investigación.

a. De acuerdo

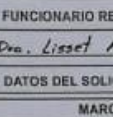

b. En desacuerdo

c. No opina.



7. La configuración de la regla que determina la afectación psíquica debe establecer como parámetro estándar de análisis, lo que la ciencia psicológica indica para el reconocimiento de la lesión psicológica cuyo resultado permita la correcta imputación y consecuentemente sanción al hecho de violencia familiar.
- a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.



 <b>PODER JUDICIAL</b>	<b>SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b> (TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27806, LEY N° 27805, LEY N° 27804) TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR DECRETO SUPLENTO Nº 043-2003-PCM E-MAIL: <a href="mailto:atencion@poderjudicial.gob.pe">atencion@poderjudicial.gob.pe</a>	N° DE REGISTRO  
<b>I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN</b> Dra. Lisset Arteaga Muñoz		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>EXCEPCIÓN</b>  <b>10 JUN 2019</b> </div>
<b>II. DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
MARCAR CON UN "X" <input checked="" type="checkbox"/> Persona Natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica		TELEFONO / E-mail: 986 389 406 / cardenas.1991@hotmail.com
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: <b>JOSÉ ROLANDO CARDENAS GONZALES</b>		
LE/DNI (Persona Natural): <b>46843587</b>	AV/CALLE/JIRÓN: <b>Av. Agrícola Hora Nº 422</b>	N°/DPTO: <b>422</b>
DISTRITO: <b>CHICLAYO</b>		PROVINCIA: <b>CHICLAYO</b>
DEPARTAMENTO: <b>LAMBAYEQUE</b>		
<b>III. INFORMACIÓN SOLICITADA</b>		
/ Cantidad de expedientes atendidos por violencia familiar en el Juzgado de Familia.		
/ Cantidad de expedientes atendidos por violencia psicológica en el Juzgado de Familia.		
/ Cantidad de expedientes ingresados al juzgado de familia por daño psíquico.		
/ Número de expedientes por violencia familiar atendidos por el Juzgado Penal.		
/ Número de expedientes por violencia psicológica atendidos por el Juzgado Penal.		
/ Listado de expedientes por daño psíquico en el Juzgado Penal.		
<b>IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN</b> <b>JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA Y JUZGADO PENAL</b>		
<b>V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON UN "X")</b>		
<input type="checkbox"/> Copia Simple <input checked="" type="checkbox"/> Copia Certificada <input type="checkbox"/> Diskette <input type="checkbox"/> Correo Electrónico		
APELLIDOS Y NOMBRES: <b>CARDENAS GONZALES, JOSÉ ROLANDO</b>		FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN:
FIRMA (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL):		
LE / DNI: <b>46843587</b>		
FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA		
OBSERVACIONES:		
NOTA: 1. La forma de entrega estará sujeta a la capacidad técnica de la dependencia. 2. En caso de Representante Legal, deberá adjuntar copia simple del Documento que acredite la representación.		
Designación para el usuario:		
 <b>PODER JUDICIAL</b>	<b>SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	N° DE REGISTRO
<b>II. DATOS DEL SOLICITANTE</b>		FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL): <b>JOSÉ ROLANDO CARDENAS GONZALES</b>		





**SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
(TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DE LA  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA APROBADA  
POR DECRETO SUPLENTE N° 043-2009-PCM)  
E-MAIL: **10 JUN. 2019**

N° DE REGISTRO

**I FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN**

*Dra. Lisset Arteaga Huñoz*

HORA:

FIRMA:

**II DATOS DEL SOLICITANTE**

MARCAR CON UN "X"		TELÉFONO / E-mail	N° RUC (Sólo para Personas Jurídicas)
<input checked="" type="checkbox"/> Persona Natural	<input type="checkbox"/> Persona Jurídica	986 389 406 / cardenas_1991@hotmail.com	

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

*JOSÉ ROLANDO CARDENAS GONZALES*

LE/DNI (Persona Natural)	AVICALLE/JIRÓN	N° IDPTO	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
46843587	Av. Agricultura	422	CHICLAYO	CHICLAYO	LAMBAYEQUE

**III INFORMACIÓN SOLICITADA**

*1. Cantidad de expedientes (Procesos) con sentencias por violencia psicológica.*  
*2. Número de Procesos con sentencias por daño psíquico.*

**IV DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN**

*JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA Y JUZGADO PENAL*

**V FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCAR CON UN "X")**

☐ Copia Simple ☒ Copia Certificada ☐ Diskette ☐ Correo Electrónico

APELLIDOS Y NOMBRES

*CARDENAS GONZALES, JOSÉ ROLANDO*

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

FIRMA (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)

LE / DNI

FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA - FORMULARIO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

1. La forma de entrega estará sujeta a la capacidad técnica de la dependencia
2. En caso de Representante Legal, deberá adjuntar copia simple del Documento que acredite la representación

Desglosable para el usuario



**SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

N° DE REGISTRO

**II DATOS DEL SOLICITANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES (SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)

*JOSÉ ROLANDO CARDENAS GONZALES*

FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN





**3. Solicitud de información estadística de casos fiscales, requerida a Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque.**



**SUMILLA: SOLICITO INFORMACIÓN  
ESTADISTICA DE CASOS FISCALES**

**Señor**

**Dr. Juan Jorge Arteaga Vera**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE LAMBAYEQUE**

**José Rolando Cardenas Gonzales**, identificado con DNI N°46843587, con domicilio en Av. Agricultura N°422 Pueblo Joven Cesar Vallejo – Chiclayo, telefono celular N°986389406, correo electronico: [cardenas\\_1991@hotmail.com](mailto:cardenas_1991@hotmail.com); muy respetuosamente me presento a usted, para expresarle lo siguiente:

Que, en aras al aporte de investigación universitaria (tesis) realizada por el suscrito, respecto al índice de criminalidad desde la implementación de la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, **SOLICITO**, tenga a bien proporcionar información estadística del periodo 2015-2018, que registra vuestra institución referido a:

- Número de caso fiscales ingresados por violencia familiar.
- Número de casos fiscales ingresados por violencia familiar en su modalidad de violencia psicológica.
- Número de casos fiscales con sentencia condenatoria por violencia psicológica.
- Número de casos fiscales con sentencia condenatoria por daño psíquico.
- Relación de carpetas fiscales con sentencia condenatoria por daño psíquico.

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos de mi mayor estima y consideración.

Chiclayo, 20 de junio de 2019.

  
José R. Cardenas Gonzales  
DNI N°46843587



## Bibliografía

- Alvarez Olazabal, E. (2017). Reflexiones y el nuevo Proceso Especial de tutela sobre la implementación de la Ley N° 30364. En Hurtado Pozo, José, *Género y Derecho Penal* (págs. 493-518). Lima: Instituto Pacífico.
- Arce Ortiz, E. (2008). *Derecho Individual de Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias* (Segunda ed.). Lima, Perú: Palestra Editores.
- Arias Torres, B. (1995). *Código Penal Anotado*. Lima: San Marcos.
- Ayvar Roldan, C. (2007). *Violencia Familiar, Interés de todos: Doctrina, Jurisprudencia, Legislación*. Arequipa: Adrus.
- Ayvar Roldan, C. (2007). *Violencia Familiar. Interés de todos. Doctrina*. Lima: Adrus.
- Basto Tigre, P. (2009). *Outsourcing y CLuster de Software en Argentina y Brasil*. México: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
- Beltrán, J. M. (1998). El Outsourcing como Técnica de Gestión Alternativa y su Regulación Contractual. *Derecho en los Negocios*(32).
- Benítez Gutiérrez, A. (2004). *Outsourcing Opción Estratégica en la Optimización de Recursos Financieros en el Pensamiento de Nóminas*. México: Escuela Superior de Comercio y Administración.
- Brian Heywood, J. (2002). *El Dilema del Outsourcing. La Búsqueda de la Competitividad*. España: Pearson Education.



Caso Fernández Ortega y Otros. Vs. México (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 30 de Agosto de 2010).

CASO VELIZ FRANCO Y OTROS VS. GUATEMALA (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 19 de Mayo de 2014).

Castillo Aparicio, J. (2017). Definición y tipos de violencia. En J. Castillo Aparicio, *Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar* (págs. 28-29). Lima: Jurista Editores.

Castillo Mercado, Y. (2014). *Análisis Cualitativo - Jurídico de la Tercerización Laboral en el Marco del Derecho de Asociación Sindical en Colombia*. Cartagena: Universidad de Cartagena.

Castillo, J. (2018). *La prueba en el delito de violencia contra la mujer y el grupo familiar*. Lima: Editores del centro.

Centro de Mujer Peruana - Flora Tristán. (2004). *Reporte Femicidio en el Perú*. Lima. Recuperado el 26 de Marzo de 2018, de <http://www.flora.org.pe/investigaciones/femicidio.pdf>

Cerezo Domínguez, A. (2017). La orden de protección a mujeres víctimas de violencia de género: una valoración acerca de su eficacia. En J. Hurtado Pozo, *Género y Derecho Penal* (págs. 463-464). Lima: Pacífico Editores.

*CODIGO PENAL*. (1991). Lima: Jurista Editores .

Congreso de la República. (15 de Marzo de 2007). Ley N° 28983. *Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres*, 3. Lima, Perú: El Peruano. Recuperado el 30 de Marzo de 2018, de <https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas->



recursos-violencia/contenedor-dgcvg-

recursos/contenidos/Legislacion/2007\_Ley\_Igualdad\_Oportunidades.pdf

Congreso de la República. (22 de Noviembre de 2015). Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 12. Lima, Perú: El Peruano. Recuperado el 22 de Marzo de 2018, de <https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/ley-30364.pdf>

Corante Morales, V., & Navarro Garma, A. (2004). *Violencia Familiar. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia*. Lima: Librería y Ediciones Jurídicas.

Cornejo Vargas, C. (2011). Algunas consideraciones sobre la Contratación Laboral. *Derecho y Sociedad*, XXII(37), 138-150. Obtenido de <http://info.upc.edu.pe/hemeroteca/tablas/derecho/DerechoySociedad/dersoc3711.html>

Corsi, J. (2004). *Un acercamiento a su expresión en violencia*. Lima: Opción.

Cruz Villalón, J. (1994). *Derecho del Trabajo y Descentralización Productiva en España* (Segunda ed.). Madrid, España: Palestra Editores.

De La Rosa Gutierrez, G. (2011). "Imputabilidad y Edad Penal". Obtenido de <http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/13330-13331-1-PB.pdf>

Di corleto, J., & Piqué, M. (2017). Pautas para la recolección y valoración de la prueba con perspectiva de género. En J. Hurtado Pozo, *Género y Derecho Penal* (págs. 412-413). Lima: Pacífico Editores.

Diccionarios: De la Lengua Española. (2012). *Diccionario Básico de la Lengua Española*. España: Larousse.



Obtenido de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://portal.mpf.n.gob.pe/de scargas/Guia\_04.pdf

urua, E., & De Corral, P. (2010). *Violencia en las relaciones de pareja. Un análisis psicológico*. Buenos Aires: B de F.

RUANO. (26 de Octubre de 2016). "Guía de Valoración de Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional". *"EL PERUANO"*. Obtenido de <chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/http://epdoc2.elperuano.com.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MTQ0NDYzMV8xMjAxNjEwMjY=>

de Villegas, T., & Rojas León, R. (2017). *Derecho Penal. Parte Especial*. Lima: Jurista.



García Cavero, P. (2012). *"Derecho Penal- Parte General"* (2° ed.). Lima: Jurista Editores E.I.R.L.

Hernández, C., Magro, V., & Cuéllar, J. (2014). *El maltrato psicológico. Causas, consecuencias y criterios jurisprudenciales. El problema probatorio*. Alicante.

Jessica Lenahan y otros vs. Estados Unidos., 12.626 (COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 21 de Julio de 2011).

Magro Servet, V. (31 de Julio de 2006). *Audiencia Provisional de Alicante*. Obtenido de Audiencia Provisional de Alicante: [https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46929/1/2014\\_Hernandez-Ramos\\_et al\\_Aequitas.pdf](https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46929/1/2014_Hernandez-Ramos_et al_Aequitas.pdf)

Martínez Chacón, E. R. (2008). *La Naturaleza Jurídica del Outsourcing*. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Martínez Garay , L. (2001). "Aproximación histórica al surgimiento del concepto de imputabilidad subjetiva en la doctrina penal alemana". *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 34-126. Obtenido de <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2001-8-5020&dsID=Documento.pdf>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2012). *Política criminal y reforma penitenciaria en el marco de un gobierno democrático e inclusivo* (Primera ed.). Lima, Perú: RS Servicios Gráficos S.A.C. Recuperado el 31 de Marzo de 2018, de <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/libro-politica-criminal-reforma-penitenciaria.pdf>



Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Noviembre de 2012). Manual de operaciones programa nacional contra la violencia familiar y sexual. 42. Lima, Perú. Recuperado el 30 de Marzo de 2018, de [https://www.mimp.gob.pe/files/programas\\_nacionales/pncvfs/stapas/MANUAL-DE-OPERACIONES-DEL-PNCVFS.pdf](https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/stapas/MANUAL-DE-OPERACIONES-DEL-PNCVFS.pdf)

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. (25 de Julio de 2016). Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP. *Decreto Supremo que aprueba el "Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021"*, 48. Lima, Perú: El Peruano. Recuperado el 23 de Marzo de 2018, de [http://www.flora.org.pe/observatorio/Norm\\_Nacio/PNCVHM\\_2009%20-%202015.pdf](http://www.flora.org.pe/observatorio/Norm_Nacio/PNCVHM_2009%20-%202015.pdf)

Ministerio Público del Perú. (2017). *Observatorio de Criminalidad*. Recuperado el 31 de Marzo de 2018, de Observatorio de Criminalidad: <https://portal.mpfm.gob.pe/boletin informativo/informacion general>

Moncada Lezama, M. C., & Monsalvo Bolívar, Y. (2000). *Implicaciones Laborales del Outsourcing*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Observatorio de Política Criminal. (2015). *¿Qué es la política criminal?* Bogotá D.C.: Observatorio de Política Criminal. doi:DC-001/2015

Paredes Siccia, C. (2016). La violencia familiar a la luz de las 100 reglas de Brasilia, a propósito de la Ley N° 30364. *Ipsa Jure*, 130-152.

Peña Cabrera Freyre, A. (2017). *Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud*. Lima: Gaceta Jurídica.



- Pérez García, M., & Aragón de Pérez, V. (1999). *Flexibilización Laboral y Outsourcing*. Santa Fe de Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike.
- Presidencia de la República. (2002). *Acuerdo Nacional*. Lima: Biblos S.A. Recuperado el 30 de Marzo de 2018, de [https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/acuerdo\\_nacional.pdf](https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/acuerdo_nacional.pdf)
- Pynoos, R., Steinberg, A., & Sorenson, S. (1993). *"Interpersonal violence and traumatic stress reactions"*. New York: L. Goldberger y S. Breznitz (Eds.).
- Retis Amaya, J. M. (2005). El Contrato de Outsourcing. *III Conferencia sobre los Contratos Atípicos*. Bogotá: Colegio de Abogados de la Universidad Católica de Colombia.
- Romero Pérez, J. E. (2003). El Contraro de Outsourcing. *Revista de Ciencias Jurídicas*(102).
- Rothery, B. (1996). *Outsourcing*. México: Editorial Limusa.
- Rothery, B., & Robertson, I. (2000). *Outsourcing: La Subcontratación*. México: Editorial Limusa.
- Rubio Correa, M. (2014). *Nulidad y Anulabilidad. La Invalidez del Acto Jurídico*. Lima: PUCP.
- Ruiz Pacheco, L. (2016). *La Desnaturalización del Contrato de Locación de Servicios Sujeto a Plazo en un Contrato de Trabajo Sujeto a Modalidad en la Legislación Peruana*. UCSP.
- Salas Beteta, C., & Baldeon Sosa, T. (2009). *Teoria Criminalización de la Violencia Familiar*. Lima: Fondo.



Schneider, B. (2004). *Outsourcing, la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los negocios*. Colombia: Editorial Norma.

Toyama Miyagusuku, J. (2015). *El Derecho Individual en el Perú*. Lima: Gaceta Jurídica.

Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (s.f). *Violencia Emocional. Ocultos Plena Luz*, 3.

Valega, C. (2015). *Avanzamos contra la indiferencia: Comentarios a la Nueva Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Intengrantes del Grupo Familiar*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Recuperado el 31 de Marzo de 2018, de <http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/11/Art%C3%ADculo-VcM1.pdf>

Zavala Rivera, A. (2011). *El ABC del Derecho Laboral y Procesal Laboral*. Lima, Perú: EGACAL.